

Asamblea

“La alternativa económica
de IU frente a la crisis”

DOCUMENTO ECONÓMICO

**X ASAMBLEA DE
IZQUIERDA UNIDA**

Madrid, 14,15 y 16 de Diciembre de 2012

Asamblea



izquierda unida

**La crisis tiene salida,
la política del Gobierno no**

ÍNDICE

1. CINCO AÑOS DE CRISIS DEL SISTEMA.....	3
2. LA CRISIS EN ESPAÑA	6
3. LA ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO ESPAÑOLA	7
4. LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER	10
5. LA CRISIS TIENE SALIDA, EL GOBIERNO NO	13
6. UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO (NMPA) COMO EJE DE NUESTRA ALTERNATIVA	15
7. PROPUESTAS ECONÓMICAS DE IU PARA UNA CONVERGENCIA SOCIAL.....	17
8. ANEXO: HAY QUE PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS (Aportación al debate)	25

1. CINCO AÑOS DE CRISIS DEL SISTEMA

1. Estamos en el quinto año de la crisis económica, cuya caracterización ya se apuntaba en los documentos de la IX Asamblea de IU. Hemos dicho que es una crisis global del sistema capitalista, basa en una crisis de sobreproducción, y no una mera crisis financiera y eso nos ha permitido elaborar a lo largo de estos cuatro años una propuesta alternativa también global que cada vez es más compartida.

El acierto en la caracterización global de la crisis nos ha permitido en el período entre la VIII y la IX Asamblea, que ahora concluye, fundamentar nuestras alternativas de una manera mucho más sólida y consecuente que otras fuerzas.

Así, en el ámbito económico, hemos elaborado propuestas para la creación de empleo y el estímulo de la economía real, alternativas de reforma fiscal justa y progresiva para financiar esas políticas y hemos diseñado los ejes fundamentales de un nuevo modelo productivo, entendido como período de transición hacia la superación del capitalismo. Esa perspectiva nos permitió valorar mejor el carácter regresivo de la reforma del sistema de pensiones públicas propiciado por el Gobierno del PSOE y las políticas de reforma laboral, tanto del PSOE como del PP. Consecuentemente, hemos elaborado alternativas a esas políticas que hoy siguen siendo válidas. Con esos criterios y con los elementos de nuestra alternativa política, social y democrática pudimos proponer a la ciudadanía un programa electoral que obtuvo un respaldo que dio un giro a la pérdida continuada de apoyo electoral que habíamos sufrido desde 1996.

Ese programa ha proporcionado las bases para el trabajo del Grupo Parlamentario en el que se incluye Izquierda Unida y, sobre todo, ha permitido fundamentar la movilización. Izquierda Unida fue pionera en la demanda de una Huelga General que diera cumplida respuesta a las políticas del PSOE y continúa presente con un significativo protagonismo en todas las movilizaciones que se están produciendo.

Junto a ello, un factor esencial en nuestro análisis ha sido la consideración de la contradicción capital/trabajo como factor central y articulador del resto de las contradicciones, y la consideración de que el problema del poder político está vinculado a esa contradicción, al modo de producción y la obtención de la plusvalía. La marcha minera realizada en el verano de 2012, aunque era una lucha defensiva, mostró con claridad el papel articulador y significativo de la movilización obrera. Naturalmente, esta valoración no desdice la importancia de otras luchas y movilizaciones.

Por otra parte, nuestras alternativas han partido de una valoración del capitalismo español que se ha mostrado acertada. No se trata de un capitalismo retrasado que precisa de una política de contención de rentas salariales o de pacto social para terminar de cumplir su papel de desarrollo de las fuerzas productivas. El capitalismo español es uno de los más financiarizados del mundo, con una internacionalización muy fuerte, y

una presencia inversora importante en los mercados internacionales, aunque su base industrial sea limitada como consecuencia de las políticas de desindustrialización que él mismo potenció.

Esas políticas han mostrado su debilidad con la crisis. La producción y la economía nacional están en cuestión; el sector servicios se resiente de la limitación de la economía productiva y la soberanía alimentaria no está asegurada. En esas condiciones, la soberanía económica, y consecuencia la política, son inexistentes.

2. Reafirmamos que estamos ante una crisis sistémica, en la medida que afecta a aspectos estructurales del modelo capitalista dominante y se manifiesta -como en un caleidoscopio- como crisis financiera, de producción y empleo, de materias primas y recursos energéticos, medioambiental y como crisis monetaria. Afecta también a aspectos superestructurales de la política y la democracia, incluyendo el modelo de construcción europea.

La crisis actual expresa el fracaso del modelo neoliberal y de globalización capitalista, que quiso encontrar la solución a la caída de la tasa de ganancia, ya evidente desde mediados de los años setenta, en los siguientes instrumentos:

- a) una internacionalización geográfica (posibilitada en gran parte en la extensión del mercado que representó la caída de los sistemas de los países del llamado socialismo real.
 - b) la inclusión de nuevos sectores, hasta ahora públicos, en el mercado y, por tanto, su consideración como mercancías.
 - c) una financiarización extraordinaria de la economía.
3. Las políticas de recorte y ajuste han fracasado. En todos los lugares donde se han aplicado ha aumentado la deuda y la prima de riesgo. El paro aumenta y el estancamiento, cuando no la recesión económica, son el escenario que acompaña a esas medidas. El euro y el modelo neoliberal de construcción europea están seriamente amenazados como consecuencia de su aplicación. La respuesta electoral de la ciudadanía en Grecia y en Francia y el aumento de la movilización y las luchas sociales en muchos países europeos preocupa seriamente a sus mentores y tienen mucho que ver con el intento de una nueva estrategia que tenga en cuenta algunos elementos de estímulo económico, hoy por hoy no aplicados por la oposición de Alemania.
 4. Es más, esas políticas no enfrentan la crisis ni representan una salida de la misma, aunque sea lejana. Sólo van destinadas a la recomposición del dominio del capital. En muchos casos, usan los sufrimientos de los pueblos como coartadas para imponer con menor resistencia las medidas que les favorecen. En ese sentido, todas estas supuestas soluciones que exigen sacrificios casi religiosos son una mera estafa. Se pretende “refundar el capitalismo” con la misma lógica que ha originado la crisis: desregulación salvaje de la economía, que ha dado rendimientos millonarios a unos pocos y ha creado las mayores

desigualdades sociales en apenas unas décadas. El capitalismo no es reformable, no es humanizable o regulable. Por ello, no se trata de refundar el capitalismo sino de construir el socialismo del Siglo XXI.

5. Por todo lo anterior, nos oponemos al rescate de los países europeos y, consecuentemente, al llamado “rescate” de la economía española. Entendemos por rescate la facilitación de ayuda financiera bajo estrictas condiciones fiscales, sociales, económicas y políticas, que son inaceptables para los pueblos y sus derechos, constituyen un retroceso en las condiciones de vida de la ciudadanía y, muy especialmente de los trabajadores, y pretenden hacer pagar las consecuencias de la crisis a los sectores populares y garantizar los beneficios del capital financiero. En el fondo, lo que verdaderamente se rescata son los bancos europeos. Esas condiciones buscan el ajuste económico mediante el descenso de los salarios y de las prestaciones sociales, y tienen como consecuencia el aumento del paro y la recesión económica. En última instancia, exigen un retroceso de la democracia.
6. Frente a este autodenominado por sus autores “rescate”, oponemos una política de solidaridad financiera, que encamine la ayuda necesaria para superar la situación de crisis sin condiciones irracionales que reduzcan el nivel de vida de los pueblos y que sean inadmisibles por estos. Esa política pasa por un nuevo papel del BCE y del BEI y por la consideración de la parte ilegítima de la deuda como impagable, al mismo tiempo que se ejecutan mecanismos de co-responsabilidad entre los bancos prestatarios y los deudores.
7. La crisis de la deuda es la crisis del euro. Fueron los poderes económicos europeos y la complicidad de la socialdemocracia y los conservadores quienes impusieron el euro y configuraron la eurozona y las instituciones que aseguran el modelo neoliberal. El euro, lejos de ser una moneda única, es un mero medio de cambio que genera contradicciones insalvables sin una política fiscal única y sin una convergencia de la política económica. El euro, al eliminar la soberanía monetaria de los países de la eurozona les obliga a medidas de ajuste y les subordina a los intereses de la banca alemana y la salida del euro, en países hasta ahora incluidos genera graves problemas económicos y sociales que deben ser valorados. La izquierda debe abordar este debate y preparar las alternativas necesarias ante cualquier decisión que pueda tomar la derecha neoliberal. Izquierda Unida impulsará un amplio debate social al respecto, a celebrar antes de la convocatoria de las elecciones europeas
8. La construcción neoliberal europea ha entrado en crisis: los gobiernos actúan al dictado de los especuladores, la soberanía popular está en entredicho y la democracia en cuestión. La economía se pone al servicio de cada vez menos gente y de intereses cada vez más inconfesables. Las medidas que toman los Gobiernos se dirigen contra los trabajadores y trabajadoras, contra los pueblos y contra las naciones. Izquierda Unida ha denunciado y analizado también la convergencia de las posiciones socialdemócratas, conservadoras y liberales en el modelo de construcción europea que desemboca en el Tratado de Maastricht, en los contenidos del Proyecto de Constitución Europea, en el Tratado de Lisboa y en la

imposición de la llamada “regla de oro” en las Constituciones de los países europeos. En el caso de España, la inclusión ha ido más allá dando prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra obligación pública. En nuestro país, la diferencia de PSOE y PP se reduce a 0,4 décimas de neoliberalismo.

2. LA CRISIS EN ESPAÑA

9. El nuevo marco de acumulación de capital en España quedó condicionado por la incorporación de España a la UE y en especial al euro, proceso dirigido política y económicamente por la oligarquía financiera y los sectores empresariales dominantes. La integración de España en la UE obligo a una reconversión industrial, a una disminución de la pesca y a una agricultura dependiente de las ayudas, de esta manera España perdía su principales instrumentos de economía productiva quedando asignado a España el papel de ser la Florida de Europa, totalmente dependiente del turismo.

Esta especialización productiva de España ha traído como consecuencia nuestra conversión en un país endeudado debido al fuerte déficit exterior contraído con los países del centro europeo y de fuera de la UE. Este proceso entra dentro de la dinámica de endeudamiento general de los países de la periferia europea, provocada por la estrategia exportadora alemana, la cual ha impuesto una división espacial dentro de la UE entre países del centro exportadores y dotados de una fuerte estructura industrial y tecnológica, y países periféricos endeudados que han reproducido un modelo comercial dependiente, esquema que define el proyecto neoliberal europeo que tiene en el euro su elemento principal.

10. Pero los países europeos que no han aceptado las políticas de austeridad, como Islandia, están superando la crisis. Otros países como China, India, Brasil, Turquía, Rusia, y algunos de América Latina, no padecen repercusiones serias de la crisis y mantienen tasas de crecimiento significativas. Es más, uno de los aspectos relevantes es que la crisis ha agudizado las contradicciones entre USA, UE y los BRIC.
11. Este carácter nacional relativamente diferenciado es muy visible en el caso español. El desempleo en España al comienzo de la crisis era equivalente al de los países centrales de Europa, la deuda pública inferior y el actual déficit fiscal era entonces superávit (2% en 2007). Solamente la balanza comercial (deficitaria desde nuestra entrada en la UE) mostraba un comportamiento negativo. Los datos, al día de hoy, muestran un cambio radical. La causa fundamental es un modelo productivo perverso, consolidado en la transición y funcional a los intereses del capital financiero (el grupo hegemónico en el capitalismo español). Ese modelo ha funcionado en nuestra economía como un eficaz acelerador de la crisis general.

España **es el eslabón más débil** del modelo neoliberal en Europa.

3. LA ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL

12. El análisis de clase de la composición del capitalismo español durante la dictadura franquista identificó a los sectores determinantes bajo la denominación de oligarquía financiera y terrateniente. Durante la transición y con el auge del neoliberalismo se abandonó en nuestra sociedad el análisis de clase. Esto ocurrió en la Universidad y en las publicaciones, pero también entre las fuerzas políticas y sociales. El “mercado” apareció como un asignador neutral y eficiente de los recursos. Incluso se ha teorizado la desaparición de la clase obrera (no solamente las modificaciones en su estructura y composición). Paradójicamente, o no tanto, a veces parecía que sólo la CEOE y la derecha política seguían creyendo en la lucha de clases y aplicando importantes recursos para ganarla.

Debemos reconocer que también nosotros hemos tenido responsabilidad en esta situación. Una alternativa al actual modelo productivo debe partir de un análisis, aunque sea somero, de la estructura fundamental del capitalismo español, de su evolución y transformaciones y de su relación con el poder político. Este es uno de los principales desafíos teóricos que están en marcha y una condición para librar con éxito la batalla de ideas que va a caracterizar al próximo período como consecuencia de la disputa de la hegemonía al neoliberalismo que nos proponemos.

De forma paralela, ese esfuerzo debe extenderse a estudiar el papel de los trabajadores asalariados en el modo de producción y a analizar las modificaciones internas. Si consideramos a los parados como “ejército de reserva” de la clase, es innegable que los trabajadores asalariados han aumentado su peso en el conjunto de la sociedad. En el sistema capitalista, la precariedad de los trabajadores ha existido siempre y el trato discriminatorio a los inmigrantes es una característica bien conocida (basta recordar la experiencia de los trabajadores españoles que han sido migrantes). La incorporación de la mujer al trabajo asalariado ha sido muy importante, pero se ha producido de manera dual: por un lado, en la función pública donde la discriminación se ha centrado en las posibilidades de promoción y, por otro, en la empresa privada donde hay que añadir además otras discriminaciones y, fundamentalmente, las diferencias salariales del orden del 30%.

Podemos afirmar que la principal fractura existente hoy en el seno de los trabajadores asalariados es la que existe entre quienes tienen empleo y quienes están en el paro.

Por otro lado, el capitalismo ha sabido fragmentar a los trabajadores a través de métodos de división y externalización de la producción, pero sobre todo ha intentado enfrentarlos mediante la utilización de contradicciones menores (desde el punto de vista general, por ejemplo, entre empleados públicos/trabajadores privados, o contratos indefinidos/contratos temporales, y en el interior de la empresa mediante sistemas de promoción, clasificación, productividad, etc.).

Hay que tener en cuenta que el capitalismo español es muy disperso, de forma que más del 85% de las empresas no llegan a tener 20 trabajadores. Hoy, en muchas ciudades importantes la empresa más grande es el Hospital de la Seguridad Social.

Hay que desmontar el concepto de “clases medias” (trabajadores con salario estable y digno) que introduce la metodología de la sociología estadounidense, y que no permite un análisis acertado de la realidad social y una adecuada política de alianzas.

En este sentido, es importante discriminar el papel de los autónomos, que no venden su fuerza de trabajo sino el resultado de su trabajo y, por tanto, actúan en el campo de la circulación de mercancías y cuando intervienen en el campo de la producción es en la medida en que contratan trabajadores (por tanto, como empresarios).

Finalmente, hay que hacer una aproximación nueva al tercer sector, incluyendo aquí las cooperativas y el conjunto de empresas e instituciones sin ánimo de lucro.

13. Los rasgos esenciales del capitalismo español después de la caída de la dictadura son:
- a) En lo económico, el predominio de un modelo de capitalismo inmobiliario y financiero marcado por el rentismo y su dependencia de atraer financiación exterior como mecanismo de crecimiento económico, financiación que ahora no se puede pagar.
 - b) En lo político, un bipartidismo imperfecto (PP y PSOE mas nacionalismos conservadores periféricos, con una ley electoral que marginaba primero al PCE y luego a IU, un diputado nuestro necesita muchos votos mas que uno del PP o del PSOE.
 - c) En lo social y laboral, lograr un fuerte dominio de la construcción como mecanismo generador de empleo relativamente bien retribuido, aunque en negro en su mayoría, y de un sector servicios (hostelería y asistencia domiciliaria, principalmente), proveedor de empleos de baja retribución.
 - d) En lo ideológico, la permanencia de fuertes vestigios del franquismo como instrumentos de dominio social. La Justicia, el poder de la Iglesia, la Monarquía y el desprecio a la memoria histórica democrática en nuestro país, son elementos dirigidos a conservar el papel central de la burguesía una vez superado el franquismo. Mantener la continuación de aspectos del franquismo (franquismo sociológico, que hoy se manifiesta en la antipolítica) garantizaba el continuismo de la cultura rentista de la burguesía española a la vez que se creaba una imagen democrática de la misma.
14. Desde esta realidad el sector dominante, la banca y grandes empresarios pretenden mantener sus beneficios por medio de un ajuste salarial de carácter permanente a través de la aplicación de recortes sociales que buscan un doble objetivo:

- Permitir la recuperación de la tasa de beneficios de las empresas por medio de la bajada de los costes laborales. Los instrumentos prioritarios para esta política son la reforma laboral que ha generado 400.000 nuevos parados en tres meses.
- La reducción del gasto público y del sector público para dedicar ese dinero a financiar la deuda del sector privado, en especial de la banca.

Para cuadrar este círculo se necesita endurecer la legislación para evitar así conflictos sociales masivos y al mismo tiempo ganar la batalla ideológica para que la mayoría de la población no vea salidas a su situación desde la lucha y las propuestas alternativas, porque la imposición de los programas de ajuste solo será posible por medio de un retroceso sin precedentes de las condiciones sociales y laborales de la mayoría social trabajadora, realidad que puede provocar un conflicto social sin precedentes en nuestra historia contemporánea.

La crisis del sector inmobiliario hace de la estrategia privatizadora de los servicios públicos una prioridad para que el capital español (y notablemente las 7 hermanas dedicadas a la construcción, FCC, OHL, Sacyr, etc.) siga manteniendo los beneficios que dejaron de obtener de la construcción. Con esa intención, se privatiza hospitales, y otros servicios sociales, para convertirlos en un negocio que se convierta en una herramienta imprescindible para la recuperación de la tasa de beneficio privada afectada por la crisis.

15. En su proceso de internacionalización, la estrategia del gran capital español ha consistido en establecer lazos orgánicos con el gran capital financiero y consolidar y reforzar sus ventajas comparativas, mientras que se ha preocupado escasamente por superar sus desventajas con relación a otros competidores (por ejemplo, altos costes financieros, escasa tecnología e innovación, calidad y servicio post-venta muy deficientes, escaso músculo financiero para las empresas que no forman parte del núcleo de hierro del sistema o no mantenían relaciones preferentes con él, modelos de gestión ineficientes, etc.).

Estas ventajas comparativas han sido esencialmente las siguientes:

- Salarios bajos y escasa protección social
- Fiscalidad muy favorable
- Reducidos costes medioambientales para las empresas (cuya consecuencia ha sido un deterioro muy grave del medioambiente y la externalización a la sociedad de esos costes)
- Privatización casi total del sector público que aprovechó la acumulación primitiva generada por los beneficios de un mercado público cautivo para financiar la expansión internacional (Telefónica, Repsol, eléctricas, etc.)
- Un poderoso sistema financiero que controlaba una parte importante del sector productivo y tiene estrechas relaciones con el poder político.

- Una cierta diversificación hacía sectores más modernos, fundamentalmente ligada al desarrollo del sector servicios y a los contratos públicos.
- Políticas de externalización destinadas a sacar de las empresas las áreas y departamentos que no constituían el núcleo central del negocio ni las fuentes decisivas de las plusvalías.
- La internacionalización del capital financiero, cuya importancia es crucial especialmente en este momento. Los dos grandes bancos españoles realizan en el mercado español una parte muy limitada de sus beneficios y de su cifra de negocios, mientras que sus accionistas son internacionales.

4. LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

16. El neoliberalismo que nos ha gobernado ha subsumido algunas de las reivindicaciones feministas vaciándolas de contenido y convirtiendo, lo que podría haber sido una auténtica progresión social, en una fachada. No obstante las mujeres, por sí mismas y a consecuencia de su lucha, han impuesto un modo de vida y unas valoraciones sociales, que marginan teóricamente al patriarcado como referente y/o modelo, lo que ha posibilitado que “igualdad” sea un término entendido e incorporado hasta en el lenguaje común, aunque aún no esté fusionado e integrado realmente en las prácticas sociales y culturales. En estos momentos de auge de las políticas de derechos, España y Grecia, se han convertido en experiencia piloto para que los mercados y el capital globalicen la pobreza y la feminicen. El acuerdo constitucional del PSOE y el PP para dar prioridad al pago de la deuda por encima de los gastos sociales tendrá graves consecuencias, especialmente sobre la situación de las mujeres.

En los momentos de involución económica y de consecuente rechazación de la sociedad, nuestra organización defiende con más fuerza que nunca que el feminismo debe ser también eje vertebrador de todas las políticas de transformación social y económica. La igualdad entre mujeres y hombres debe consolidarse como garantía para que la sociedad no sólo no involucre ideológicamente, volviendo a tiempos indeseables, sino también como garantía de mantenimiento de los principios de justicia y democracia.

Las mujeres a nivel general, han conseguido cotas de igualdad real y formal importantes, gracias a la lucha del movimiento feminista, pero nuestra realidad difiere según las partes del mundo. En occidente, los derechos de la mujer se enfrentan a la influencia de la Iglesia Católica que ha encontrado una aliada leal y obediente en una derecha que va subiendo escaños en los distintos gobiernos de Europa y ganado influencia en América del Norte, y pretende mantener subyugadas a las mujeres bajo una concepción patriarcal de la sociedad y la familia, controlando y despojándola de los derechos más básicos y

personales. Para el patriarcado en oriente, la influencia islamista es una losa inapelable que sigue sometiendo a las mujeres a una negación de derechos insostenible, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de agresiones, violaciones y asesinatos/ejecuciones

17. Volviendo a España, a pesar de todos los avances conseguidos, la tasa de paro femenino se sitúa en un 25 %, la de actividad en un 53 %. En cuanto a la representación en el Congreso de los Diputados, las mujeres no sobrepasan el 36%, como altos cargos no llegan al 25% en la Administración General del Estado, en los puestos de dirección de las empresas del Ibex, el 6,8%, y en las Cámaras de Comercio, el 3,3%.

La violencia no cesa: el número de mujeres asesinadas por violencia de género, sigue siendo una constante, se han solicitado más de 40.000 órdenes de protección en el año 2010 y ha habido más de 8.000 denuncias por abusos y acosos sexuales, miles de mujeres están siendo explotadas sexualmente con la anuencia de la sociedad. Estos datos no son meramente indicativos o sumatorios, sino que demuestran que la igualdad total y real es aún un derecho no conquistado, ya que la violencia de género y la desigualdad son elementos inseparables. Existe en nuestra sociedad, como dijimos antes, una apariencia de igualdad más que una igualdad real, porque de existir realmente no hubiera sido, ni sería tan fácil eliminar organismos de igualdad y recursos de atención, como el antiguo Ministerio, los consejos de participación de las mujeres, institutos de la mujer, casas de acogida, etc. Esa falsa apariencia a la que nos llevó el Partido Socialista Obrero Español, la hemos constatado anualmente a través del presupuesto destinado a políticas de mujer y se ha agravado con el PP. Llevamos años reivindicando la dotación de un 5 % de forma progresiva para políticas específicas. Donde no se emplea dinero, no se puede hacer política, no existe un interés real por la consecución de una sociedad igualitaria. El artificio socialista ha puesto en situaciones difíciles a las mujeres feministas y, ahora, que el PP pretende acabar con todo y también con la timorata ley de aborto, será necesaria la movilización para reconquistar los frágiles derechos que hemos conquistado.

El Gobierno del PP está provocando el acorralamiento de las ideas progresistas y sociales, el aumento del paro, el desmantelamiento de los sectores económicos, de las conquistas laborales, el acoso y privatización del servicio público, el hostigamiento a las personas migrantes, el arrinconamiento de la juventud, el mayor empobrecimiento de pensionistas y personas dependientes, y, por supuesto con ello también la deconstrucción total de los derechos más elementales de las mujeres. En pocos meses de gobierno, el Partido Popular, la derecha franquista, la derecha recalcitrante, ha puesto encima de la mesa, no su programa, sino su auténtica ideología, su forma de entender el mundo: vivan los ricos y que vivan cada vez mejor y pretenden situar a las mujeres en el lugar donde según ellos nunca debieron salir: el hogar, con un control férreo de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Si aludíamos antes a la apariencia, ahora no la hay. Desde el PP se tacha a las mujeres como exclusivamente válidas en relación con la maternidad; se han cargado el concepto de paridad y de igualdad de oportunidades de un plumazo; han eliminado recursos de protección social a las mujeres allí donde gobiernan; transmiten el ideal femenino

como cuidadora y esposa; han reducido los programas estatales de igualdad a la mínima expresión; se alían social y parlamentariamente con los machistas más recalcitrantes; vuelven a la carga con que el aborto es un crimen, aunque no lo expresen así y protegen a fascistas, homófobos y xenófobos, tanto del mundo político como eclesiástico. La política que está llevando a cabo el PP es lo peor que nos podía pasar a todas y a todos, pero las mujeres sufren un ataque brutal por el simple hecho de ser mujeres. Nos queda una dura batalla en todos los frentes, pero en estos nefastos momentos políticos que estamos soportando, la ola neoliberal no debe enturbiar nuestros objetivos, no debe hacernos dudar de cuáles, hoy más que nunca, deben ser nuestras metas.

Todo lo contrario, Izquierda Unida responde anclando más profundamente sus presupuestos políticos. En estos momentos difíciles para la participación a nivel general y para los discursos específicos y sectoriales en particular, no debemos perder el horizonte de que, luchar contra la crisis económica con nuestras alternativas políticas, incluye también situar entre las prioridades a las mujeres, porque si no es así, por muchas parcelas de representación y de influencia que consigamos no estaremos construyendo una sociedad ni siquiera democrática.

18. Tras tres siglos de lucha constante y tenaz, las reivindicaciones feministas aún no están conseguidas y los plenos derechos de la mujer aún no están asentados. Las conquistas siempre están cuestionadas, siempre están en el peligro de desaparecer, y más, en situaciones de regresión económica, social y política. Las mujeres son tratadas, en no pocas ocasiones, como un colectivo más dentro de los necesitados de atención social. Pero, la actual situación política ha reactivado la participación, se ha recuperado la calle y a las movilizaciones se incorporan nuevas personas, hasta ahora alejadas de la política y los partidos. Lo mismo ocurre con los movimientos sociales: frente al PP crece la conciencia de que no nos podemos dormir en los laureles.

IU se encuentra en una posición ventajosa ideológicamente porque aglutinamos, cada vez más convergencia con personas y organizaciones sociales. Izquierda Unida, en todos los niveles, debe comprometerse a fomentar y respetar las alianzas con el movimiento feminista, desde la independencia de nuestro programa, para actuar políticamente con un sector político y social cuya participación es imprescindible para la transformación. Es necesario, por tanto, que la convergencia social pase decididamente por la alianza expresa con las mujeres feministas y sus organizaciones. Tenemos que situar la igualdad y la lucha por los derechos sociales y económicos como eje central de nuestro quehacer político, en igualdad de condiciones. No podemos minusvalorar la regresión en derechos sociales o renunciar o postergar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos que iniciar una campaña de acción política dirigida a visibilizar la regresión en conquistas sociales que el Gobierno está provocando. Frente a la regresión en derechos de las mujeres tenemos que reaccionar no con la defensa de las timoratas y frágiles medidas legislativas vigentes, heredadas del gobierno anterior, si no con un paso hacia delante, comprometiéndonos con la igualdad real y defensa plena de los derechos sociales, económicos y reproductivos.

5. LA CRISIS TIENE SALIDA, EL GOBIERNO NO

19. Anteriormente hemos afirmado que las medidas adoptadas hasta ahora son falsas soluciones de la crisis y conducen a más paro, mayor pobreza y al estancamiento cuando no a la recesión económica.

Lo cierto no es, como afirma el Gobierno, que si no se hubieran tomado las medidas de recorte estaríamos como Grecia, sino que estamos en riesgo de estar como en Grecia, precisamente como consecuencia de esas medidas.

No hay ningún estudio solvente que, partiendo de las medidas adoptadas, pueda predecir un horizonte optimista. Los estudios sobre el mercado de trabajo de la OCDE anticipan para los años próximos un incremento del paro hasta superar el 25% de la población activa. Incluso el Gobierno en su escenario macroeconómico sitúa el paro en 2016 por encima del existente en 2011 y, lógicamente, muy lejos de las tasas de desempleo del inicio del 2008.

La recuperación del sistema financiero es incierta. El problema no es que la banca española tenga activos tóxicos, sino que debe más de un billón de euros a la banca internacional, cuyo pago genera serías dudas. La recuperación del sistema productivo no es posible con las políticas del PP. Es más, se apuesta por la continuidad del actual modelo con un turismo de masas de baja calidad y una apuesta por proyectos como Eurovegas como sustituto de la construcción.

El Gobierno exige sacrificios al pueblo, pero se los ahorra a los causantes de la crisis. Ofrece una estrategia de regresión económica y social y es incapaz de utilizar con un criterio de equilibrio en la carga el margen de maniobra que tiene. Se justifica diciendo que hace lo que no quiere, pero eso sólo acentúa su indignidad.

Ante esta situación se articula la respuesta neoliberal en torno a las políticas de ajuste. El crecimiento de la deuda lleva al capital financiero internacional, comprometido con los créditos a bancos y empresas españolas, a presionar sobre la Unión Europea, el FMI y el BM, con la finalidad de articular políticas de ajuste o *rescates financieros* que suponen una gigantesca operación de socialización de pérdidas de los bancos que son pagadas con fondos públicos, mientras los beneficios van directamente a manos de unos pocos.

Todas las políticas económicas han estado y están dirigidas a garantizar el pago de la deuda a toda costa, políticas que son responsables de la actual recesión económica y de la situación dramática que viven las capas trabajadoras. Más de medio billón de euros se han puesto directa o indirectamente al servicio de la Banca, desde que empezó la crisis. ¿Cuántos millones de puestos de trabajo se hubieran podido crear con esos recursos?

Esta situación genera el hundimiento de la actividad productiva y del consumo que termina por incrementar aun más la deuda, situación a la que responden los acreedores financieros con más presión sobre la deuda soberana, lo que provoca una subida de los tipos de interés, del precio que se paga por los préstamos; se encarece la deuda y se crea un efecto bola de nieve.

- 20.** En coherencia con ello, el PP ha elaborado un Programa Nacional de Reformas, PNR (2012-2015), que junto al documento de objetivos presupuestarios 2013-14 exigido al Gobierno por la Comisión Europea constituyen los documentos de referencia fundamentales de sus medidas durante el próximo periodo político, que se extiende a continuación de nuestra IX Asamblea.

Esos documentos concretan las reformas del PP, aunque con un valor relativo El PNR contiene la filosofía de Gobierno del PP y es un documento con un elevado contenido ideológico. Del concepto meramente cuantitativo del PSOE, que aceptaba el retroceso en la política redistributiva de rentas al cambio del modelo social y del papel del Estado: una sociedad de desiguales y un Estado árbitro, en lugar de un Estado social redistributivo.

Por supuesto, este cambio cualitativo no significa un menor traspaso de recursos a los intereses privados, sino su incremento y aceleración. Pero se añade la regresión social, la reconsideración del modelo de Estado Social, democrático y autonómico, y el intento de superación de la crisis desde un nuevo paradigma social profundamente reaccionario e individualista.

- 21.** En lo concreto, las políticas del PNR se orientan a:

- Un cambio estratégico del modelo social (del Estado social al Estado mínimo y represivo)
- Situar el modelo económico en un nuevo punto de partida para la recuperación del capitalismo:
 - Traspase ingente de recursos al capital financiero
 - Descenso de un 20% en los costes salariales para recuperar la tasa de ganancia
 - Privatización de partes importantes del sector público (agua, salud, ..) con la misma finalidad (se trataría de mercados poco maduros).

6. UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO COMO EJE DE NUESTRA ALTERNATIVA

22. Izquierda Unida levanta su alternativa frente a esas medidas y a esos objetivos. Porque sabemos que no existe ningún ejemplo de que se haya salido de una crisis de estas características con las políticas de austeridad y contracción de la demanda que está aplicando el PP, bajo los dictados de la UE, el FMI y el BCE.

Somos partidarios de políticas de creación de empleo y estímulo de la economía real, principalmente a través del sector público y del apoyo a los pequeños empresarios y a la economía social.

23. Vamos más allá de las políticas que se aplicaron con cierto éxito en el caso de la crisis de 1929, con la que puede ser comparada por su envergadura la crisis actual. Esas medidas, cuya paternidad se atribuyó a Keynes, serían hoy insuficientes.

Proponemos estimular la demanda e impulsar el desarrollo económico, cierto, pero con otro enfoque y contenido políticos. En primer lugar, ese desarrollo ha de ser sostenible y selectivo. En segundo lugar, el papel del sector público será fundamental. En tercer lugar, es inseparable de una mayor democracia económica en la sociedad y en la empresa. Hablamos de un nuevo modelo productivo alternativo (NMPA) en una nueva sociedad, que será una democracia política y social avanzada.

24. La construcción del NMPA parte del análisis crítico del modelo fracasado y de las políticas neoliberales que lo han sustentado e impulsado, incorporando como orientación estratégica de la alternativa nuestro concepto de nueva sociedad. La contradicción capital/trabajo está en el centro de esta elaboración:

- Considerar el pleno empleo, digno y de calidad, como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.
- Defender lo público y el papel de lo público en la economía. En nuestra propuesta, el Estado debe reequilibrar el mercado, no solamente corregirlo. El Estado debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El Estado y otras formas de propiedad social, pública y democrática.
- Modificar el modelo de relaciones laborales, que es en España el rasgo más negativo del actual modelo productivo; mucho más que la especulación inmobiliaria. Y una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial en este país; hay que penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación.

- 25.** Desde un punto de vista estratégico y con un alcance constituyente, planteamos:
- Introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta.
 - Desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc.
 - Modificar profundamente el sector financiero, recuperando y desarrollando el papel de la Banca Pública. Los Bancos intervenidos deben permanecer en manos del Estado indefinidamente.
- 26.** Con un enfoque sectorial, proponemos:
- Enfocar desde el interés general, democráticamente expresado, los desafíos de la reforma del modelo energético, del uso de los recursos naturales como el agua y de los retos del cambio climático. Debemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones para lograr el desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas, para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria.
 - Defender y desarrollar la protección social, la Seguridad Social, y los servicios sociales.
 - Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.
 - Producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico y la soberanía alimentaria un principio rector.
- 27.** Izquierda Unida aprueba en esta Asamblea un conjunto de propuestas con la intención de aportarlas al proceso de Convergencia Social y Política que pretendemos impulsar. Son, por tanto, aportaciones que deliberadamente están abiertas al debate y a su concreción. Pero, evidentemente, en su formulación de principio marcan también la identidad de Izquierda Unida y su visión de la transformación social hacia un nuevo modelo de relaciones económicas.

La crisis del capital financiero español es el acontecimiento de mayor trascendencia política y económica ocurrido en la formación social española en muchos decenios. Las vinculaciones entre el capital financiero y las grandes empresas, los medios de comunicación y algunos partidos políticos dan un cariz especialmente grave a la crisis sistémica en nuestro país. La fracción dominante del capitalismo español tendrá serias dificultades para jugar ese papel en el futuro. El capital financiero es incapaz de resolver las contradicciones a las que le ha llevado su propia lógica y el consentimiento desregulador.

Esto abre nuevas posibilidades a políticas de alianzas diferentes a las que hasta ahora han dado la mayoría política. Esas políticas de alianzas deben tener una base objetiva que es la recuperación de la producción nacional, sobre la base de un desarrollo sostenible que genere pleno empleo y que implique una incorporación cualitativamente diferente en la economía internacional.

Partimos del criterio de que no hay más riqueza que la que produce el trabajo humano.

Las propuestas de IU se desarrollan en los apartados siguientes.

7. PROPUESTAS ECONÓMICAS DE IU PARA UNA CONVERGENCIA SOCIAL

- 28.** El objetivo esencial del nuevo modelo productivo es garantizar el bienestar de las personas, sus posibilidades de realización individual y social, y su participación en la toma de decisiones de la colectividad.

Se trata de construir un modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, de manera que la educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable, la energía, el transporte público, correos, el deporte y la cultura... sean considerados servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública y tengan carácter universal y gratuito.

El factor esencial del nuevo modelo productivo es el logro de pleno empleo digno y de calidad, mediante políticas de estímulo de la demanda y el desarrollo de los servicios sociales como base de la democracia real. Consideramos el estímulo de la demanda como la herramienta fundamental para lograr ese objetivo. Será preciso un nuevo modelo de relaciones laborales que sitúe el contrato indefinido como la norma, elimine la precariedad laboral y la desigualdad entre hombres y mujeres.

El Estado deberá ser “empleador de último recurso” de forma que todo ciudadano que lo solicite deberá tener derecho a un trabajo remunerado, una formación o un subsidio por desempleo.

Izquierda Unida desarrollará como punto central de su actividad la lucha contra el paro, mediante el desarrollo de una Estrategia por la Creación de Empleo, cuyos contenidos esenciales son:

1. Empleos verdes: reforestación; soberanía alimentaria, agricultura ecológica y reforma de la PAC; tecnología de los alimentos; energías renovables; rehabilitación sostenible; auditoría y consultoría medioambiental
2. Empleos sociales públicos (población empleada en el sector público >10%, media de la UE-15: 16%): educación de 0 a 3 años, aplicación de la Ley de Dependencia, salud pública, servicios tributarios, de empleo y de integración social
3. Empleos de proximidad (algunos semipúblicos): ayuda a domicilio, comercio de proximidad, reciclado de residuos de proximidad
4. Economía social y cooperativa, con la creación de un Banco público especializado

En concreto:

- Se derogarán las reformas laborales aprobadas por PSOE y PP, estableciéndose medidas de subida del salario y las pensiones mínimas, reparto del trabajo (jornada de 35 horas. Recuperación de la jubilación con derechos plenos a los 65 años y voluntaria a los 60, y progresivo adelanto de la jubilación a los 60 años).
- Fijación de un salario máximo en las Administraciones Públicas y sus organismos vinculados o dependientes y en el sector privado.
- Se recuperará la primacía de la negociación colectiva. Mejora de la calidad de la democracia sindical y del papel de las organizaciones sindicales. Situar como orientación en la negociación colectiva la reducción del abanico salarial en las empresas sobre la base de la elevación de los salarios más bajos. El contrato básico será el indefinido y se recuperará el principio de causalidad en toda contratación que no sea indefinida. Cumplimiento de lo establecido en el artículo: 8 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato verbal y el contrato de hecho a los efectos de obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social. Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo. Supresión de las ETT y de las Agencias de Colocación con ánimo de lucro.
- Se fomentará la incorporación de la mujer a la población activa asalariada, garantizando el principio “a igual trabajo, igual salario”. Se aplicará una batería de medidas que favorezcan esta entrada y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de las escuelas infantiles públicas; extensión de los permisos de maternidad/paternidad; conciliación real de la vida familiar con la laboral...).

- 29.** Apoyo al cooperativismo mediante medidas laborales, fiscales y de crédito. Consideración como de interés social de la empresa cooperativa en la que, al menos el 80% de los trabajadores son socios cooperativistas con plenitud de derechos en la gestión y dirección de la cooperativa. Incluir en la formación secundaria y profesional la formación para el cooperativismo y la formación general de derechos de los trabajadores, del consumidor y del ciudadano.
- 30.** El NMPA eliminará la constitución de cualquier “ejército laboral de reserva” formado por parados obligados a buscar trabajo en condiciones indignas. El estado garantizará trabajo, seguro de desempleo, subsidio o formación a toda la ciudadanía. Frente al concepto de “flexiseguridad”, oponemos una auténtica seguridad salarial y profesional.

Consideramos necesario abrir en la sociedad el debate sobre la renta básica, para que esta sea un instrumento acorde con lo dicho en el párrafo anterior y, su aplicación no pueda ser utilizada como un factor de disminución de los salarios.

- 31.** Proponemos introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta. Defendemos la participación democrática de los trabajadores en la planificación económica y en la gestión de las empresas. Apostamos decididamente por la economía social.
- 32.** El nuevo modelo productivo exige romper con las políticas llevadas a cabo en los últimos decenios, tanto por el PSOE como por el PP. En este mismo documento hemos valorado las diferencias existentes entre ambos, que son reales, pero es necesario subrayar que los dos partidos mayoritarios (junto a los nacionalistas) coinciden en el proyecto liberal de construcción europea, la disminución del coste del trabajo como factor de incremento de la llamada “competitividad”, el desmantelamiento de los servicios públicos y la aplicación política de medidas funcionales a los intereses del capital financiero. Ambos han coincidido en el mantra ideológico de que “no hay otra salida”.

En consecuencia proponemos:

- Derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera
 - Incorporación al texto de la Constitución Española del principio de garantía del gasto social.
- 33.** EL NMPA debe incorporar un nuevo sistema de incentivos y penalizaciones sociales y económicas. Frente al beneficio individual exacerbado, debe garantizarse el interés general. Los factores a incentivar son, entre otros:
- La creación de empleo digno y de calidad.

- Las políticas empresariales de conciliación de la vida personal y familiar.
- Las medidas de reparto del trabajo.

Los despidos con beneficios, las deslocalizaciones industriales, y las viviendas, locales y oficinas vacíos serán fuertemente penalizados.

La legislación favorecerá la operativa de las pequeñas empresas, propiciando ventajas en la licitación pública, favoreciendo el comercio de proximidad, incorporando la I+D+i.

- 34.** El cambio de modelo energético es un eje principal del nuevo modelo productivo que proponemos. Será preciso modificar sustancialmente el mix energético, los procesos de producción de energía y, con el mismo nivel de importancia, los patrones del consumo afectando a la construcción, la industria, el transporte y los hábitos domésticos. Deberá reducirse la intensidad energética y los edificios y viviendas pasar de ser consumidores a generadores, mientras los vehículos de transporte deberán desarrollarse desde el consumo de energías fósiles al uso de energías alternativas almacenadas.
- 35.** Es imprescindible impulsar el NMPA a través de una nueva reforma fiscal global, una reforma fiscal justa y progresiva que establezca los principios de suficiencia de los ingresos para hacer frente a los gastos, del principio de equidad como fundamento democrático del gasto público y del criterio de convergencia fiscal con la UE tanto en la contribución fiscal como en el gasto social. Declaración de las rentas del trabajo y del ahorro en la misma base imponible. Eliminar gran parte de las desgravaciones fiscales del impuesto de sociedades. Limitar hasta su consideración como excepcional y sólo para los inicios de la actividad empresarial de la tributación por el sistema de módulos. Modificación del IBI estableciendo una penalización significativa para los inmuebles vacíos. Los inmuebles de la Iglesia Católica debe pagar el IBI. Reforma legal del las SICAV para que un accionista no pueda detentar más del 5% del capital y elevación al 5% de las retenciones. Equiparar el tipo fiscal efectivo de las ETVE y SICAV al menos al de la Soc. Cooperativas de Trabajo Asociado, que está en el 13%, aproximadamente. Transformación del IP en un Impuesto sobre las grandes fortunas. Restituir los impuestos de sucesiones y donaciones.
- 36.** Abogamos por un nuevo sistema de fiscalidad verde bajo el principio de “quien contamina, paga”. Deben incorporarse al coste de los procesos de producción los costes medioambientales desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los residuos y su impacto a largo plazo sobre el medio ambiente. Una eficaz política contra el cambio climático exige la aprobación de una tasa de CO₂, así como cambios en los actuales marcos fiscales, al menos, en impuestos existentes tales como: hidrocarburos, matriculación, circulación de vehículos y el IVA sobre productos energéticos y eléctricos. Hay que partir de la consideración de que los impuestos sobre la energía en España son de los más bajos de Europa, y que existe información suficiente para que la subida de impuestos energéticos pudiera hacerse por tramos, introduciendo una cierta progresividad en función del consumo.

37. Defendemos como uno de los factores con mayor margen para incrementar la recaudación fiscal y aumentar la justicia del sistema la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
38. Consideramos necesario avanzar en la federalidad fiscal para poder exigir corresponsabilidad. Será precisa la legislación sobre mínimos de contribución fiscal para cada impuesto y tasa para evitar el dumping fiscal y la promulgación urgente de la Ley de Financiación Local.
39. La crisis del capital financiero es una oportunidad irreplicable para eliminar su influencia sobre la determinación político-social de las prioridades. ¿Qué se produce?, ¿cómo se produce? y ¿para quién se produce? deben ser los contenidos de competencia exclusiva de una planificación democrática de la economía. El sistema financiero debe ser estrictamente regulado y las únicas instituciones financieras de envergadura sistémica deben ser las públicas.
40. La Banca Pública garantizará el crédito necesario para las pyme. Se construirá un polo de Banca Pública a partir de las instituciones financieras nacionalizadas o intervenidas. Este polo se completará con fichas bancarias de instituciones que ya fueron públicas y con la Banca Postal.
41. Hay que propiciar un cambio radical en el modelo de ventajas/desventajas comparativas de los productos españoles. Rechazamos el esquema ideológico contenido en la idea más extendida de competitividad, que finalmente se reduce a la competitividad por precio. Incluso desde ciertas propuestas progresistas, cuando se propugnan soluciones de devaluación competitiva se acepta implícitamente ese criterio que conduce indefectiblemente a la justificación de la reducción de los costes salariales. Según un reciente estudio, la repercusión del coste salarial en el ingreso neto por producto vendido es en España, en media, del 13%, lo que desmonta la relación coste salarial-competitividad.

Entre las desventajas comparativas cuya corrección debe ser prioritaria, destacamos las siguientes:

- a) Debilidad y dependencia financiera, subsanable mediante una Banca Pública.
- b) Altos costes energéticos
- c) Un modelo de gestión empresarial poco eficiente
- d) Escasa atención a la I+D+i
- e) Debilidad de la inversión en capital productivo (sólo un aumento medio del 1% en los últimos 15 años)
- f) Inadecuación de la Formación Profesional

- 42.** Frente a las políticas de contención del déficit introducidas en la Constitución por el pacto bipartidista PP-PSOE opondremos políticas fiscales concretas cuyos objetivos son:
- a) Misma contribución fiscal que la media de la zona euro, es decir 6 puntos más.
 - b) Mismo gasto social que la media de la zona euro, es decir 7 puntos más
 - c) Mismo fraude fiscal que la media de la zona euro
 - d) Mismo porcentaje de economía sumergida que la media de la zona euro
- 43.** Se desarrollará un polo público en todos los sectores estratégicos de la economía, especialmente en el energético, transporte, alimentario, comunicaciones, nuevas tecnologías. Se asegurará el carácter público de la propiedad y gestión del agua.
- En este marco, se creará un Polo Integral de la industria del medicamento de propiedad y gestión públicas, que se responsabilizará de la investigación, la producción nacional, la seguridad y la distribución mayorista de los medicamentos.
- 44.** El derecho a la vivienda, garantizado en la Constitución, será exigible. Se propiciará una solución pública para garantizarlo mediante la utilización de los stocks de viviendas vacías para crear programas de viviendas en alquiler moderado y el fomento de las cooperativas de uso de viviendas sociales.
- 45.** Frente a las políticas de austeridad y recortes, defendemos un modelo alternativo de gestión del gasto público, fundamentado en lo siguiente:
- a) Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y desarrollo autonómico de la misma.
 - b) Reforma de la Ley de Transparencia para hacerla equivalente a la legislación de los países europeos. Inclusión de la Casa Real y del Banco de España.
 - c) Revisar tasas y precios públicos con un criterio de progresividad, aportando exenciones para los trabajadores en paro. Incorporar posibles nuevas tasas con criterios claramente simbólicos, además de recaudatorios (por ejemplo, tasa a los cajeros automáticos).
 - d) Habilitar las Agencias Tributarias Autonómicas y Locales y a la Inspección de Trabajo para identificar indicios racionales de fraude fiscal y economía sumergida, trasladándolos de oficio a la Agencia Tributaria.
 - e) Revisar todos los contratos y licitaciones con relación al precio medio del mercado. Impedir las elevaciones de precio en contratos y licitaciones públicas.

- f) Introducir de sistemas de control del gasto público y de ahorro de insumos con la participación de trabajadores públicos y usuarios. Aplicar modelo de utilidad social del gasto.
- 46.** Como sectores prioritarios para su impulso, apoyamos las conclusiones de un estudio de CC.OO:
- a) *Sectores emergentes.* Son los sectores beneficiados por las macrotendencias de cambio y en los cuales España tiene ventajas comparativas claras. Estos sectores son los que más impulso público deben tener, ya que serán los que aportarán un mayor volumen de riqueza y empleo en las próximas décadas. Se incluyen dentro de este grupo a: energías renovables; alimentos procesados, en mayor medida los relacionados con los productos de la agricultura ecológica; construcción y reparación naval; construcción de material ferroviario; servicios sanitarios; y servicios sociales.
 - b) *Sectores básicos:* Son sectores imprescindibles para mantener el volumen de empleo en España, pero en la medida que han constituido la columna vertebral de la *economía marrón*, deberán afrontar importantes procesos de modernización que, en muchos casos, deberán contar con importante apoyo público para que se reduzcan al mínimo los posibles costes sociales de una transición que debe tener también el objetivo de aumentar la cohesión social, y no generar más desigualdades. Si esta modernización sectorial se afronta con prontitud pueden salir fortalecidos, ya que desarrollarán nuevas tecnologías y productos capaces de ganar cuota de mercado en el ámbito internacional, y formarán también parte de la nueva economía verde. En este grupo se incluyen, entre otros, los sectores de construcción, automoción, turismo y química.
 - c) *Sectores apuestas de futuro.* Son sectores que se benefician de las tendencias de cambio, pero que están escasamente implantados en nuestro país. Se incluyen: mecatrónica, biotecnología médica (investigación en células-madre), aparatos médicos, biocombustibles que no entren en competencia con la producción de alimentos por el uso de la tierra y producción de servicios medioambientales.
 - d) *Sectores transversales.* Son los sectores cuyo desarrollo es imprescindible para la obtención de ventajas competitivas de los anteriores sectores. Comprenden: educación e I+D+i servicios empresariales, transporte, tecnologías de la información y las comunicaciones.
- 47.** Auditoria de la deuda y rechazo de la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social.
- 48.** Nos oponemos al Pacto del Euro e impugnamos los tratados que desde Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital. Proponemos un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de todas las personas que vivimos en Europa.

49. Entre los sectores prioritarios en el marco del nuevo modelo productivo están la agricultura, la ganadería y la pesca, no tanto por su participación en el PIB como por su importancia estratégica, su valor social, su capacidad de integración y cohesión del territorio. La soberanía alimentaria es uno de los objetivos centrales de la política agraria en el Nuevo Modelo Productivo.

En este sentido, es preciso desarrollar una alternativa concreta a la PAC, cuyo objetivo sea el impulso de la economía familiar agraria; el control de la cadena alimentaria; una política de precios justos en origen. Defenderemos una reforma de la Política Agraria Común que corrija las desigualdades sociales y territoriales que generó en el pasado y que tenga en cuenta las especiales características de los territorios desfavorecidos, entre ellos, las zonas de montaña.

No aceptaremos la congelación o disminución del presupuesto agrario comunitario. Antes, al contrario, abogaremos por el incremento de fondos para atender las nuevas necesidades. Además, la distribución sectorial y territorial de los fondos debe tender a criterios de cohesión, tales como el empleo, la renta y el territorio.

Apostaremos por un sistema de ayudas que se dirijan exclusivamente a los agricultores y ganaderos en activo y con un techo máximo de ayudas por explotación en función de la mano de obra ocupada.

Nos oponemos a las medidas de desregulación del mercado, como la desaparición de las cuotas lácteas para el año 2015, que traerá como consecuencia la desaparición de miles de ganaderías, la deslocalización de la producción y pondrá, también, en riesgo a una parte de nuestro sector agroalimentario.

ANEXO

Sí hay alternativa a la crisis, pero fuera del sistema

Hay que poner la economía al servicio de las personas

Borrador 8 de septiembre de 2012 (Aportación al debate X Asamblea Federal IU- presentado por Alberto Arregui en nombre de un grupo de compañeros y compañeras)

La crisis que sacude a los países desarrollados desde 2007 está provocando un enorme cambio en la conciencia de millones de personas, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, que constituyen la gran mayoría de la sociedad y los principales afectados por sus consecuencias. Antes de la recesión de 2008/2009, (ahora estamos entrando en la segunda), la situación distaba de ser idílica para la mayoría de la población mundial: crecían las desigualdades y el expolio de la naturaleza, pero muchos confiaban en encontrar una salida personal, que trabajando duro podría asegurar su futuro y el de sus hijos. Era lo que nos vendían insistentemente: la economía es más “sana” que nunca y las crisis son algo del pasado. Y, a los ojos de la mayoría, todo indicaba que no había alternativa al capitalismo. La caída del Muro de Berlín, reafirmó entre la izquierda sindical y política la conclusión de que capitalismo era el “menos malo de los sistemas posibles” y asumió que su papel era gestionarlo, no superarlo.

Sin embargo, hoy todo está cambiando bajo los envites de una crisis que va mucho más allá de un ciclo recesivo. En el Estado español, terminaremos 2012 con unos 6 millones de parados e inmersos en una nueva recesión, con más recortes del gasto social y de los derechos laborales ¿cómo no poner en cuestión esta sociedad? La siguiente pregunta es: si el capitalismo no funciona ¿cuál es la alternativa? Cada vez más personas buscan una respuesta a la misma. Izquierda Unida propone buscarla fuera del sistema, no dentro: hay que poner la economía al servicio de las personas, porque no es un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y en beneficio de quién se usan. Pero hacer eso nos lleva a cuestionar al propio capitalismo, no tratar de arreglarlo, de darle un rostro más humano. Y el primer paso que debemos dar para encontrar una salida al laberinto de la crisis, es comprender por qué estamos en ella.

NO HAY REMEDIO SIN UN BUEN DIAGNÓSTICO

Hay recursos, sufrimos una crisis de sobreproducción

Desde la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas en agosto de 2007, que fue el pistoletazo de salida de esta situación económica, la idea más común es que la raíz de la crisis es financiera. Sin embargo, la realidad es que el problema de fondo va mucho más allá, naciendo en la economía productiva y las relaciones de propiedad que caracterizan el sistema capitalista. Hay que comprender la dinámica del sistema y sus consecuencias.

Una de las paradojas del capitalismo desde que existe es la sobreproducción. Lo que nos está sucediendo hubiera parecido absurdo a cualquier persona de otra época: no estamos en crisis por una mala cosecha, una epidemia o por falta de medios. En todo el mundo hay millones de personas condenadas al paro forzoso y las fuerzas productivas están a medio gas o están siendo destruidas. En sectores como la vivienda, la sobreproducción es evidente con millones de viviendas vacías igual que se destruyen toneladas de alimentos para mantener los precios, pero en la industria manufacturera y otros sectores, ésta se presenta como un exceso de capacidad de producción. La utilización de la capacidad productiva instalada española apenas supera el 70% y hay casi 6 millones de parados. Es decir, podríamos producir un 30% más con los medios de los que disponemos y tener a un 25% más de trabajadores generando riqueza con su labor. Ese exceso es crónico en el capitalismo, pues en los momentos álgidos del auge nunca se superó el 85% de utilización ni dejó de haber en torno a dos millones de parados, pero con la crisis el problema se agudiza drásticamente.

Así que, aparentemente, estamos en crisis porque hay demasiados recursos. Uno de los sectores que muestra de forma más aguda esta contradicción entre los recursos disponibles y su uso es la vivienda. Cientos de miles de familias están siendo desahuciadas de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas, a la vez que hay millones de viviendas vacías. ¿Cómo es posible? Porque las viviendas nunca se construyeron con la finalidad principal de atender la necesidad de alojamiento de las personas, sino la de ser un negocio. En el capitalismo el valor de uso está subordinado al valor de cambio.

Otro ejemplo rotundo de esa contradicción son los alimentos. La capacidad de producción que existe actualmente permitiría alimentar a 12.000 millones de seres humanos, casi el doble de la población mundial, sin embargo, millones de personas pasan hambre y mueren por enfermedades derivadas de esa situación. Es más rentable producir biocombustibles —y especular con los alimentos— que dar de comer a las personas. Esa es la esencia del capitalismo, todo gira en torno a la ganancia.

Cuando un sector es rentable el dinero acude a él buscando beneficios, se realizan inversiones hasta que llega un punto en que la rentabilidad decae por distintos motivos y, entonces, hay una crisis que acaba destruyendo parte de la fuerza productiva creada. Una parte de los capitales desaparece, con su corolario de despidos, y otra va en búsqueda de otros sectores que ofrezcan rentabilidad. Ese es el mecanismo de mercado. Así ha sucedido con la vivienda en el Estado Español o en Estados Unidos y otros países. Pero lo mismo acaeció con las punto.com a finales del siglo XX o con los ferrocarriles en el XIX. El mercado funciona anárquicamente, los capitales se desplazan por el mundo, compitiendo entre sí, en busca de la máxima rentabilidad y la economía crece conforme a ese objetivo, no siguiendo criterios racionales y sociales a largo plazo. Por eso hay crisis cíclicas que purgan los excesos de los auges. Cada auge prepara la siguiente crisis, que no se trata de un accidente sino de un mecanismo consustancial a la economía capitalista. En ella todo se crea o se destruye en función de la ganancia de los propietarios de los medios de producción.

En realidad, no hay demasiados medios productivos desde el punto de vista de las necesidades sociales, sino desde el punto de vista de su uso rentable por las grandes empresas privadas. Hay sobreproducción de capital.

Las ganancias no caen del cielo. La especulación no crea riqueza. El especulador actúa como el jugador de un casino, con la diferencia de que juega con los recursos de toda la sociedad. Cuando un fondo de inversión invierte en alimentos, consciente de que la demanda de los biocombustibles, combinada con malas cosechas va a hacer subir los precios, es como si se lo estuviera quitando de la boca a varios millones de seres humanos. Pero para poder robar o especular, antes debe de haberse creado la riqueza. Ésta surge del trabajo humano y de los recursos naturales, y de los medios técnicos que el esfuerzo humano ha creado con los materiales que le brinda la naturaleza y que él mismo pone en movimiento. Todo el dinero del mundo sería inútil sin esa fuerza productiva. El origen de las ganancias de la burguesía es la explotación de los trabajadores y de la naturaleza, y el resultado de las crisis es una intensificación de esa explotación ambos.

Para comprobar lo que decimos basta ver como todos los planes para resolver la crisis de las entidades financieras terminan en un recorte del gasto social, de los derechos laborales, y de una reducción o eliminación de las medidas (escasas) que perseguían proteger los recursos naturales. En otras palabras, los asalariados nos veremos obligados a trabajar más horas a cambio de menos, a pagar más por la sanidad o la educación y por todo en general, o a quedarnos en el paro con ayudas míseras o sin ellas, para amortizar los créditos fallidos del último auge y que las cuentas de resultados de las empresas sigan creciendo. Y la naturaleza seguirá siendo esquilmada más allá de su capacidad de regeneración con ese mismo objetivo. Al final, los Bancos Centrales no crean ni un átomo de riqueza real. Le darán más o menos a la máquina de hacer dinero, anotarán en sus balances billones de euros que prestan a bajo interés a los bancos privados, pero, al final, la cuenta la paga la clase trabajadora y la naturaleza.

Una sociedad fundada en la explotación

La crisis no ha traído la explotación. Las condiciones de trabajo en las nuevas industrias chinas, en las maquilas mexicanas, los *minijobs* alemanes o la precariedad laboral en el Estado español, por citar sólo algunos, son fenómenos que se produjeron durante el auge y que de hecho lo explican en gran medida. En la mayoría de los países desarrollados o emergentes, el reparto de la renta fue cada vez más favorable a los empresarios.

Porque la desigualdad nace en el propio sistema productivo, que es el que determina el reparto de la renta. Y la explotación es posible porque la mayoría de las fuerzas productivas necesarias para la existencia de nuestra sociedad son propiedad privada de una clase social, la burguesía, mientras la mayoría de la población, los asalariados, no tiene otra posibilidad de ganarse la vida que vender su fuerza de trabajo, física o intelectual. Una minoría de grandes accionistas con enormes fortunas, la gran burguesía, domina a través de sociedades de inversión y desde los consejos de administración de las multinacionales, los medios de producción. Desde que empezó la crisis la propiedad se ha concentrado más en menos manos, y sigue haciéndolo. Hace años que grandes empresas compran millones de hectáreas de tierras cultivables pues la alimentación y la producción de biocombustibles son un negocio garantizado. Es la misma dinámica que está llevando a privatizar la gestión del agua, de la sanidad, educación y de todos los servicios básicos, que tienen asegurado un mercado por tratarse de necesidades vitales. Y es que la explotación sólo puede funcionar si los medios de producción son propiedad privada.

Esa dinámica no es producto de la particular avaricia de los grandes accionistas o de los administradores de las empresas, por grande que sin duda sea, sino que es el resultado de la dinámica natural del sistema. La gran burguesía contemporánea, los principales accionistas y dueños de las grandes empresas transnacionales, busca la máxima rentabilidad. Sus fortunas circulan por el mundo en búsqueda de la misma y ningún gestor que no procurara alcanzar la máxima rentabilidad duraría mucho tiempo en el puesto. Aunque pusiéramos al frente de dichas entidades a la gente más generosa del mundo, el resultado no variaría sustancialmente, pues el mecanismo objetivo de la competencia desplaza las empresas menos rentables y las destruye.

A pesar del decrecimiento económico, la explotación de los recursos naturales se está acentuando pues, sean cuales sean las cifras absolutas de aumento de la economía, lo que buscan las grandes multinacionales es obtener el margen de ganancia mayor posible. Y, al final, su objetivo es pagar menos por el trabajo humano y por el uso de los recursos naturales. El mercado principal para todas las grandes empresas es el mundial y el mercado de la mano de obra también es de carácter mundial.

Buena parte de los beneficios que los capitalistas norteamericanos, alemanes o españoles han obtenido durante estos años se han invertido en países como China, en búsqueda de la mayor rentabilidad que los bajos salarios de los trabajadores chinos y las pocas restricciones a la destrucción medioambiental proporcionaban. India, Brasil, otros países emergentes, y sobre todo China han acaparado gran parte de la inversión externa internacional. Las tasas de inversión del gigante asiático doblan a las de la mayoría de los países desarrollados y, en última instancia, la razón está en esa rentabilidad. China se ha convertido en uno de los principales talleres del mundo, con una producción que cada vez está produciendo bienes más avanzados tecnológicamente, y eso ha dado como resultado un déficit crónico de los países desarrollados hacia dicha potencia, en particular de Estados Unidos. La forma en que el capitalismo tiende a resolver ese desequilibrio es abaratando el precio de la mano de obra en Norteamérica, con lo que se reducen las importaciones y se aumenta la rentabilidad de las inversiones en su propio país. Eso supone más explotación para los trabajadores y más conflictos entre las potencias. Y eso explica la dinámica general de recortes de derechos laborales que recorre a todos los países desarrollados.

En resumen, los intereses de la burguesía y de la clase asalariada, en su conjunto, no son compatibles sino antagónicos. No es cierto que de esta crisis se sale haciendo todos sacrificios, el capitalismo sale de las crisis explotando más a los trabajadores. En definitiva, es la lucha de clases, que nunca desapareció y que ahora se recrudece.

No es una crisis financiera

La crisis financiera es una de las manifestaciones de la crisis del capitalismo, pero no el origen de la misma. Su importancia innegable refleja que el sector financiero domina la economía como resultado del desarrollo natural del capitalismo. Pero es la industrialización de enormes zonas del planeta, particularmente en Asia, con un aumento global del número de asalariados y de los recursos naturales empleados, sin precedentes en la historia por su

magnitud, lo que ha permitido a los propietarios de los medios de producción acumular inmensas fortunas. La riqueza no se ha desmaterializado, sino que se puede contar por empleos y pesar en toneladas. Sin esa riqueza real, el enorme crecimiento de las finanzas jamás hubiera sido posible.

En una sociedad capitalista la expresión última de la riqueza es el dinero. La gran burguesía acumula la máxima proporción posible de sus fortunas en forma de activos financieros, mediante los que posee el control de las grandes empresas productivas, y, si puede asegurarse con ello más rentabilidad, evita el trance de la inversión productiva con los riesgos que siempre comporta. De ahí la baja tasa de inversión en las economías desarrolladas y el auge de la especulación. Se ha convertido en una burguesía rentista. Varios miles de grandes fortunas controlan la riqueza mundial y especulan con ella.

Además, controlan el ahorro del conjunto de la sociedad y logran con ello otra fuente de ingresos. Junto a la plusvalía que extraen al asalariado o asalariada en su puesto de trabajo, luego le obligan a devolver una parte cada vez mayor de su salario en forma de pagos por hipotecas y créditos.

No es posible distinguir entre unos capitalistas financieros especuladores y malsanos, y otros capitalistas productivos y saludables, como se pretende en ocasiones. La red de vínculos entre las grandes empresas, financieras o no, es muy intensa. Las participaciones recíprocas hacen imposible semejante separación.

Sin duda, el desarrollo del crédito ha alcanzado tal nivel que es más importante que nunca. Genera más inestabilidad, estimula los auges y agrava las crisis, pero no es su creador. Las empresas necesitan crédito abundante, las familias dependen del crédito para comprar muchos productos, y a los bancos, cuyo negocio es prestar, les interesa dar cuántos más créditos mejor. De hecho ganaron mucho dinero así.

Pero, con la crisis, hoy los balances de los bancos están repletos de créditos incobrables —sobre todo de grandes empresas—, avaladas por terrenos y viviendas cuyo precio ha caído muy por debajo de su valor. Es la llamada “recesión de balances” que no es otra cosa que la necesidad de reconocer que buena parte de los activos que tienen los bancos carecen de valor. En realidad, los bancos y las cajas españolas —y el conjunto de la banca mundial— estarían en quiebra si no fuera por el respaldo de sus respectivos gobiernos con enormes cantidades de dinero público.

La cuestión en litigio es quién paga por esos activos que se han esfumado, si los accionistas y acreedores o la mayoría de la sociedad directamente o a través del erario público. En el primer caso, pierden más las grandes fortunas, en el segundo, pierden más los trabajadores y la pequeña burguesía. Para imponer el segundo plan, cuentan con la ventaja de utilizar como arma de chantaje que no es posible dejar caer a los bancos como a otra empresa, porque estamos hablando de los ahorros de la sociedad.

El auge de la economía española

En el Estado español, la construcción ha sido el motor del crecimiento económico en el último auge. La obra residencial y civil fueron los componentes principales de la inversión. Ello era posible por la abundancia de mano de obra relativamente barata y la disponibilidad de crédito a bajo interés, gracias a la pertenencia al Euro. La afluencia de trabajadores inmigrantes fue muy provechosa para la burguesía española, pues facilitó el abaratamiento los costes laborales. El salario medio real cayó durante los años del auge.

Por su parte, los distintos gobiernos propiciaron las condiciones para el boom inmobiliario. La vivienda es una necesidad vital de las familias y la falta de una política de vivienda pública protegida de proporciones adecuadas a las necesidades, aseguró el terreno de partida del negocio privado de la construcción. Pero, como todo lo que se produce en una sociedad capitalista, la vivienda es una mercancía más cuya finalidad prioritaria no es satisfacer una necesidad social, sino venderla al mayor precio posible. Y, por sus características, ser un bien de primera necesidad, con un alto precio y durabilidad, se convirtió en una mercancía muy apropiada para especular. Gran parte de las que se construyeron durante el auge, se vendieron como inversiones, lo que llevó a una dinámica ascendente de los precios que se retroalimentaba. Cuánto más subía el precio de la vivienda más dinero se invertía, más viviendas se hacían, más créditos se pedían, y vuelta a empezar. Se trataba de comprar una vivienda que luego podías revender por una cantidad sustancialmente mayor. El precio de una vivienda había multiplicado varias veces su valor real, generando la famosa burbuja inmobiliaria.

Pero, ni el número de viviendas ni sus precios, podían crecer indefinidamente. Cuando la construcción empezó a perder fuerza, la burbuja que se fundaba en el incremento constante de los precios, estalló, y el círculo ascendente se convirtió en círculo vicioso. El crédito que ayer estimulaba el negocio inmobiliario provocando el famoso “efecto riqueza”, se ha transformado en el “efecto pobreza”. Desde entonces, muchas viviendas valen menos que sus hipotecas y es una de los factores decisivos —no el único— de la crisis financiera española.

La crisis que empezó en Estados Unidos, actuó como precipitador de la actual situación al dinamitar el auge del crédito barato, pero la caída era inevitable. De hecho, la rentabilidad de las empresas ya había empezado su ciclo descendente en 2007.

Como siempre en el capitalismo, el negocio primó sobre las necesidades sociales, y a pesar de que se construían más viviendas aquí que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas, miles de familias tenían vetado el acceso a una vivienda porque no podían hacer frente a sus precios. Y otras se tuvieron que endeudar de por vida, con consecuencias nefastas que se han comprobado con la llegada de la crisis, cuando el pago de unas viviendas sobrevaloradas está devorando los ahorros de millones de familias y a otras, que las pierden, las deja en la calle y atadas a esas deudas, en una versión contemporánea de la “esclavitud por deudas” que existió en el mundo Antiguo.

¿Sabían que esto podía pasar? Es evidente, pero mientras duró fue un excelente negocio sobre todo para una minoría de grandes empresarios, que se situaron entre las principales fortunas del Estado. Y los bancos jugaron un papel clave: eran accionistas de las grandes constructoras

e inmobiliarias, prestatarios de las mismas, de los clientes. Mientras el negocio fue en auge, ganaron dinero por todas partes. Durante los años del auge esa minoría se embolsó la parte principal de las ganancias, pero las deudas nos las pasan a la mayoría a través de la crisis del sector financiero.

Por otra parte, la obra civil era regada con ayudas públicas de todo tipo, fondos europeos, que convirtieron a las grandes constructoras en multinacionales del sector. La construcción de una amplia red de autopistas, el AVE y otras infraestructuras. Sólo el AVE ha supuesto 97.000 millones de euros en inversiones de dinero público.

Finalmente, que la construcción fuese el principal motor de la inversión de la gran burguesía española tuvo más consecuencias, pues implicaba la renuncia a desarrollar otros sectores productivos de tal forma que el Estado español era incapaz de compensar sus importaciones con exportaciones. Eso hizo que el déficit comercial creciera hasta los 70.000 millones de euros en 2007, una diferencia que había que compensar con endeudamiento. Una situación insostenible a largo plazo, como la crisis atestigua.

¿Qué hicieron con los beneficios del auge inmobiliario? En primer lugar, acumular enormes fortunas. En segundo lugar, muchas de las principales empresas españolas —buena parte de ellas antiguas empresas públicas privatizadas durante los gobiernos de Felipe González y Aznar— se convirtieron en multinacionales, comprando empresas latinoamericanas (muchas de ellas privatizadas) y empresas europeas. La mayoría de las empresas del IBEX 35, las mayores del Estado, ya obtenían más beneficios por sus filiales internacionales que por su actividad aquí, una tendencia que se ha acentuado con la crisis.

Igual que la inversión inmobiliaria, esa internacionalización de las grandes empresas españolas requirió de enormes créditos. Por esa razón, es el endeudamiento de las empresas el capítulo principal de la crisis financiera que hoy estamos sufriendo. Así, cuando se sana a los bancos con dinero público, se está saneando a las grandes empresas españolas, de las cuales forman parte las propias entidades financieras.

Además, han aprovechado la crisis para liquidar las Cajas de Ahorros, tratando de presentar el problema financiero como un fenómeno de las cajas, cuando el conjunto del sistema tiene los mismos problemas. Su objetivo: sanearlas con dinero público que, al final del recorrido, sus depósitos acaben definitivamente en manos de los bancos privados.

Las consecuencias de la crisis

Quienes más se beneficiaron del auge, quienes tenían la responsabilidad de dirigir de facto la economía, sus propietarios, y los gobiernos que defendían sus intereses presentándolos como los de todos, son los principales responsables de esta situación. Han dirigido sus negocios de forma muy rentable para ellos, para los grandes accionistas (aunque no siempre), pero de forma nefasta para la sociedad. En eso consiste el capitalismo, en la máxima rentabilidad privada de una minoría, aunque eso conlleve el máximo perjuicio para la mayoría de la sociedad. Hoy eso es evidente para cualquiera.

En el Estado español hay recursos para atender las necesidades sociales. Pero la política que se ha aplicado desde que empezó la crisis ha ido orientada a incrementar la tasa de ganancia, y esa es la finalidad de las crisis en una economía capitalista. El Excedente Bruto de Explotación (EBE) —que es básicamente la renta bruta de las empresas— del año 2011 suponía el 44,8% del PIB, más de 480.000 millones de euros. Si desde el año 2000 al 2007, la participación en el PIB del EBE español había crecido en 1,4 puntos, desde 2007 a 2011 lo hace en 2,8. Las empresas que no han cerrado se han quedado el mercado de aquellas que quebraban, y han reducido plantillas y salarios con más intensidad de lo que ha caído la producción. Es decir, están explotando más a sus trabajadores. Y eso pueden hacerlo gracias al desempleo masivo, que pesa como una losa sobre los trabajadores a la hora de luchar. Las nuevas contrarreformas laborales aprobadas por el Partido Popular, que defiende los intereses de la clase social a la que representa, profundizan las que iniciara el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, facilitando incrementar aún más dicha explotación.

Junto con una reducción directa de los costes laborales, las grandes empresas están teniendo otro canal de ayuda: el gasto público. Reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, bonificaciones a los contratos, una nueva ronda de privatizaciones de servicios rentables, incluso amnistías fiscales y, sobre todo, el saneamiento de la deuda financiera a través de ayudas públicas, lo que está suponiendo la conversión de facto de deuda privada en pública. Y, la consecuencia de eso es la reducción del salario indirecto de los trabajadores que es el gasto social: recortes de plantillas públicas, recortes del gasto sanitario, educativo, en dependencia... a la par que nos suben los impuestos, tasas... Es decir, los asalariados pagamos más a cambio de menos.

El gasto social, que nunca llegó ni siquiera a la media europea, se está recortando de forma tal que nos llevará directamente a los niveles de gasto propios de la dictadura franquista. Aquí tenemos otro ejemplo que demuestra que no estamos ante un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y de quién se beneficia con ellos. La producción por persona (PIB per cápita) española es del 90% de la media europea, y el gasto social es del 70%, esa diferencia equivale a 70.000 millones de euros que harían innecesarios los recortes en gasto social, pero que sólo podrían salir de los ingresos de los sectores más ricos de la sociedad española. El resultado de toda la llamada política de ajuste es un enorme trasvase de renta de los trabajadores hacia la gran burguesía.

Insistimos en la gran burguesía, porque lo que la pequeña burguesía (los pequeños empresarios) y los autónomos (en realidad, trabajadores encubiertos) puedan ganar a costa de los trabajadores, lo van a perder con el hundimiento de la capacidad de consumo de los trabajadores y el deterioro de sus propias condiciones de trabajo. De hecho, las pequeñas empresas han sufrido las consecuencias de la crisis mucho más que las grandes, pues tienen menos reservas para resistir y, además, en muchas ocasiones las grandes han externalizado pérdidas dejando de pagar a muchas de ellas o imponiéndoles peores condiciones contractuales. Ya durante el auge, la tendencia en el reparto de los beneficios fue cada vez más favorable a las grandes en detrimento de las pequeñas. En otras palabras, la crisis acentuará el proceso de concentración de capital para que el mercado se reparta entre un número menor de empresas que antes de la crisis. El mito del “capitalismo popular” ha quedado en evidencia una vez más, con la ruina de las pequeñas empresas y el saqueo de los recursos de millones de pequeños ahorradores.

Competitividad y explotación

Todo el planteamiento de la burguesía española consiste en acentuar la explotación de los trabajadores para obtener mayores beneficios y atraer la inversión extranjera de nuevo. Ese incremento de la explotación puede producirse por varias vías: combinada con inversiones en tecnología e intensificando los ritmos de trabajo, lo cual permite obtener más ganancia con la misma mano de obra, o menos (plusvalía relativa). Mediante la prolongación de la jornada laboral sin aumento salarial equivalente, incluso con reducción (plusvalía absoluta). Incluso con el recorte del salario por debajo del mínimo necesario para una vida digna, es decir, el simple y llanamente, mediante el robo. O, más probablemente, con una combinación de todas.

Actuando así también buscan hacer más competitivas las exportaciones españolas a costa de los asalariados, ya que permite obtener más producción por empleado y por hora trabajada y, así, disminuir los precios sin menoscabo de sus ganancias, incluso elevándolas. En definitiva, igualar las condiciones salariales de todos los trabajadores a la baja, acercando las de los fijos a los temporales, y, en general, a las de los empleados de empresas chinas o de otros países “emergentes”.

De hecho, el déficit comercial se ha reducido drásticamente durante la crisis, en parte por un aumento de las exportaciones —que se está cortando en esta nueva recesión general— y, sobre todo, por la caída de las importaciones por la reducción del consumo de las familias trabajadoras.

Los recortes a los trabajadores les garantiza más rentabilidad, que es lo único que realmente importa en términos capitalistas, pero no es una solución real ni evitará nuevas crisis. Es imposible que todos los países resuelvan sus problemas mediante las exportaciones. Todas las naciones no pueden tener un superávit comercial, porque dicho superávit tiene que ser el déficit de otros, necesariamente.

No hay que ir muy lejos. El déficit de la economía española, y de la mayoría de los países de la UE, ha sido simétrico al superávit alemán. Una buena parte de los beneficios que la burguesía alemana cosechaba con sus exportaciones y explotando a sus trabajadores, los invertía en el negocio inmobiliario, entrando en el capital de las empresas españolas y, sobre todo, prestándoles el dinero. Durante años se han beneficiado del boom inmobiliario español, alimentándolo. La política de Merkel tiene como objetivo primero, asegurar que recuperan el dinero de sus préstamos e inversiones, convirtiendo al propio Estado en garante de los mismos. De hecho, el gobierno alemán ha inyectado más de 300.000 millones de euros de dinero público a sus entidades financieras para evitar su quiebra.

Pero los planes de Merkel tienen otra meta: provocar una reducción general de los salarios y un aumento de la jornada laboral, así como una reducción del gasto social que permita recortar las cotizaciones sociales de las empresas, de tal forma que el conjunto de la mano de obra europea resulte tan barata como la norteamericana y, sobre todo, la china. En el capitalismo, la fuerza de trabajo es una mercancía más que tratan de pagar al precio más bajo posible y utilizar el máximo de tiempo. Llevan años intentando consolidar medidas en esa dirección (directiva Bolkenstein, aumento del límite para la jornada laboral semanal a 65 horas, etcétera), y la crisis y el desempleo les brinda una ocasión única para tratar de vencer la resistencia de los trabajadores.

La gran burguesía española, mientras pueda permanecer en la UE que es su principal mercado, coincide plenamente con la segunda meta que señalábamos de la política de Merkel, aumentar la explotación de los trabajadores. Por supuesto, pugnan con el Gobierno alemán para lograr los nuevos préstamos en las condiciones menos onerosas posibles pero, al tiempo, la UE les brinda una excusa muy buena para aplicar la política de recortes de los derechos laborales y sociales que llevan años ansiando. Por eso, y por que tienen más que perder saliendo del euro que quedándose en él, aceptan mansamente las políticas que les impone la UE y el Gobierno alemán. El autoritarismo de la UE, y de la burguesía alemana, es el autoritarismo que necesita el capitalismo porque es la única forma de aplicar sus políticas ante el rechazo que inevitablemente suscitan. Es el mismo autoritarismo que emplea Rajoy con los trabajadores y la juventud en el Estado español.

En cuanto a los rescates, los préstamos de la UE no pueden resolver el problema de fondo del sector financiero, que es un excesivo endeudamiento, pues en realidad lo agravan al aumentarlo cuando lo que se necesita es reducirlo. La creación del “banco malo”, que continuará la tarea realizada por este gobierno y el anterior de dar respaldo público a las entidades financieras privadas, se convertirá en la vía para sanear las pérdidas. O les compran los productos tóxicos a un precio adecuado para sanearlas o deberán darles ayudas extra. Si las dejan quebrar el Estado también tiene enormes pérdidas (en avales y ayudas que ya ha dado y que no recuperaría, más de 100.000 millones de euros) sin mencionar las pérdidas para los depositantes que no podría cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos.

Estas medidas les sirven para trasvasar la deuda del sector privado al público y, a la vez, ganar tiempo mientras imponen una tasa de explotación a los trabajadores que permita a la burguesía española seguir ganando dinero y pagando las deudas acumuladas. Ese es el secreto de la política que están aplicando en toda Europa. Su éxito depende de varios factores, los conflictos entre las distintas burguesías, pero sobre todo de que consigan imponer a los trabajadores el pago de la factura de la operación.

El “modelo” alemán

La burguesía alemana ya aplicó un recorte muy severo a sus asalariados. Ella ha sido la más beneficiada por la formación de la Unión Europea. No así sus trabajadores. Además de su amplia base industrial, la burguesía alemana ha contado con una gran ventaja en términos capitalistas, ser la primera en imponer un drástico plan de ajuste de las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores que han hecho más rentable la economía germana.

En la etapa de gobierno del socialdemócrata Gerhard Schroeder, cuando el paro en Alemania alcanzó los 5 millones, se aplicó un recorte brutal de las condiciones laborales y de los derechos sociales. Las conquistas de años, como las 35 horas, fueron eliminadas en sectores que la habían conquistado. Se redujeron los salarios y las prestaciones sociales por desempleo se recortaron drásticamente. De hecho, el reparto de la renta a favor de los beneficios de las empresas en Alemania crece más deprisa que en España hasta 2007. Ese es el secreto del “milagro” alemán.

Es necesario denunciar la falsedad de las cifras del desempleo en Alemania, pues hay varios millones de personas sin trabajo por distintos motivos —con subsidios míseros o sin ninguno— y de subempleados —que con sus sueldos no pueden mantener a sus familias— que no se contabilizan como desempleados. Además de millones de trabajadores con *minijobs*, salarios retribuidos por las empresas con 270 euros mensuales que son subvencionados con una pequeña ayuda pública. El paro real en Alemania no es muy distinto de aquí.

Lo mismo podría plantearse en muchos países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Hay millones de parados ocultos porque reciben pequeñas ayudas o, simplemente, no se les contabiliza como tales. Y, además, está en auge el número de trabajadores pobres, aquellos que teniendo un empleo, sus remuneraciones son tan miserables que viven bajo la línea de la pobreza. Por eso, no hay ninguna posibilidad de que la emigración sea una salida para un número significativo de trabajadores en paro. El paro es crónico en el sistema porque es necesario para mantener la “oferta” de mano de obra por encima de la demanda y garantizar que su “precio” es bajo.

Esta etapa de crisis es particularmente profunda porque hay un enorme exceso de capacidad productiva junto con un volumen de deudas, muchas de ellas incobrables, sin precedentes por su envergadura. En términos capitalistas, salir de esta recesión implica un periodo de recesiones muy profundas con recuperaciones débiles, hasta que se corrijan ambos problemas, destruyendo parte de las fuerzas productivas y reduciendo el nivel de endeudamiento a costa de la mayoría de la sociedad. Todo eso para luego volver a preparar una nueva crisis. El “pequeño problema” de todo esto son las consecuencias para los trabajadores y para el planeta de las recetas capitalistas.

Es más, el capitalismo ha llevado la extracción de recursos naturales más allá de la capacidad de reposición de la naturaleza. Por decirlo en términos económicos, ha tomado un crédito del planeta que ahora está empezando a cobrarse sus deudas. Los gastos por desastres naturales, malas cosechas, etcétera, y el agotamiento de materias clave como el petróleo ya están teniendo consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. Por tanto, no cabe esperar que los ciclos habituales de la economía capitalista sigan eternamente sin consecuencias. A largo plazo, es sencillamente inviable.

Tarde o temprano habrá una recuperación económica. De hecho, hay billones de euros en las cuentas de las grandes empresas y de las grandes fortunas a escala mundial, también de las españolas, que no están siendo utilizadas en actividad productiva porque no esperan de ella gran rentabilidad por ahora. Pero lo que podemos ya anticipar con certeza es que el empleo que se creará no servirá para erradicar el desempleo y que será en pésimas condiciones. Y, finalmente, no evitará nuevas crisis. Esas son las expectativas que nos ofrece el capitalismo.

Al final, la lucha de clases

Finalmente, para entender la situación que vivimos hay que tener presente que en una sociedad en la que una clase que explota a otra, la lucha entre ellas juega un importante papel económico. Aunque el capitalismo cuenta con mecanismos objetivos para imponer sus

medidas, básicamente el despido —de ahí la importancia de que el paro sea crónico— y la sustitución de mano de obra por máquinas, la conciencia y organización de la clase oprimida también pesa a la hora de establecer el reparto de la tarta. No es lo mismo la situación a la que se enfrentan las burguesías norteamericana y europea después de la Segunda Guerra Mundial, —con la existencia de un país no capitalista como la Unión Soviética, un movimiento obrero en alza (y armado en varios países por la lucha contra los nazis)— donde la amenaza de una revolución era más que real, que en la que se encuentran tras la caída del Muro de Berlín y el posterior hundimiento de la URSS. Es diametralmente opuesta. La restauración del capitalismo en el antiguo bloque del Este y, especialmente, la transformación de China en una economía de “mercado socialista” (una contradicción en los términos, un oximorón), consolidaron en la sociedad la idea de que no había alternativa al capitalismo.

En la izquierda sindical y política se reafirmó, entre la mayoría de sus miembros, la idea de que no había alternativa a la economía mercado. El capitalismo, que ya era considerado “el menos malo de los sistemas posibles” se convirtió en el único posible. Los más “radicales” se aferraron a la máxima de “economía de mercado sí, sociedad de mercado, no”, como si fuese posible separar ambas cosas. El resultado ha sido que las políticas económicas de los principales partidos de la izquierda en los países desarrollados se parecen, como una gota de agua a otra, a las de los partidos de derechas, hasta el punto de que son capaces de gobernar en coalición. Las consecuencias de este retroceso de la izquierda se han hecho mucho más patentes con la crisis del capitalismo pues, paradójicamente, en el momento en que éste muestra su fracaso lo que sale a relucir es la crisis de la propia izquierda que es incapaz de dar una alternativa. Rodríguez Zapatero, en un arranque de sinceridad, lo dijo claro: “creíamos que íbamos a cambiar a los mercados, y los mercados nos han cambiado a nosotros”.

También la política sindical ha llegado a una encrucijada. Durante los años del auge, a la par que se imponían medidas que precarizaban la situación de los trabajadores por gobiernos de “izquierdas” y de derechas, la mayoría de las direcciones sindicales promovieron una política de moderación salarial en aras a una mejora de la productividad y la competitividad, que favorecieron un intercambio más desigual de la renta.

Las direcciones sindicales, aún ahora, siguen insistiendo en la necesidad del diálogo social, aunque se ha demostrado que esa vía era un callejón sin salida. No comprenden que la época del “pacto social” ha muerto, todo lo decidirá la correlación de fuerzas. Cuando gobernaba el PSOE, contaban con tener el respaldo del gobierno —cuyo voto dependía fundamentalmente de los trabajadores— pero el Ejecutivo cedió a las presiones del capital como era previsible. Ahora, el gobierno directo de la derecha y la patronal, por supuesto, ha dado varias vueltas de tuerca más. Las discrepancias están sólo en la dosis.

Esas políticas de renuncias de gobiernos de izquierda y sindicatos, reforzaban el ambiente de aceptación del capitalismo. En el caso del sindicato, su función quedaba reducida a regular el grado de explotación del trabajo, en la práctica, pero no a cuestionar dicha explotación. Eso reforzó una concepción sindical cada vez más orientada a la gestión de servicios, frente a la concepción tradicional de ser parte de la lucha del movimiento obrero para transformar la sociedad.

Esa política de conciliación con la burguesía ha sido un factor económico muy importante, pues en lugar de aprovechar el auge para variar a favor de los trabajadores el reparto de la riqueza — el momento más favorable para los asalariados—, las rentas empresariales han ganado terreno en la mayor parte de los países desarrollados. Por eso ha crecido la desigualdad.

Si la crisis histórica de la izquierda socialista y comunista ha sido un factor muy importante en la prolongación del último auge, también está siendo un factor en el inicio de esta nueva etapa de crisis, pues la burguesía no siente que nada amenace su dominación. Tras un desconcierto inicial que les llevó a algunos a plantear la necesidad de refundar el capitalismo, incluso a pedir un “paréntesis en el libre mercado”, han comprobado que, por ahora, nada parece capaz de impedirles aplicar sus recetas tradicionales frente a la crisis.

Y, paradójicamente, es la acción de la propia clase dominante la que está cambiando la situación. Los ataques a los trabajadores son de tal envergadura que el sindicalismo de gestión y servicios es inviable. La patronal aprovecha el descrédito de los propios sindicatos y su debilitamiento para tratar de enterrarlos definitivamente, se eliminan subvenciones y derechos adquiridos esperando con ello dejar completamente desarmados a los trabajadores. Pero es un error confundir a las direcciones sindicales y políticas con el propio movimiento obrero. La necesidad objetiva de tener unos sindicatos y organizaciones políticas capaces de defender los intereses de los trabajadores provocarán un cambio profundo en el conjunto de las organizaciones de clase, como preludio necesario e inexcusable de un cambio en la sociedad. En realidad, ambas cosas han de ir parejas.

La unidad y la organización de los trabajadores para luchar es una necesidad creciente e ineludible para hacer frente a esta etapa del capitalismo. Necesitamos unos sindicatos con una política capaz de aunar la defensa de los intereses más inmediatos de los trabajadores, sus empleos, sus salarios, sus condiciones de trabajo y vida, con una propuesta de cambio social. No se trata sólo de defendernos de estas medidas que acentúan la explotación que sufrimos, sino de acabar con el mismo sistema de explotación.

Ya no estamos sólo ante una lucha sindical, es necesario generar una fuerza política capaz de transformar la sociedad, de poner en cuestión el sistema desde su raíz, porque no se puede ganar sólo desde el terreno sindical.

SEGUNDA PARTE

SÍ HAY ALTERNATIVA, PERO FUERA DEL SISTEMA

Un cambio en las relaciones de propiedad

La crisis no es un producto inevitable del funcionamiento económico general, como los huracanes del clima o los terremotos de la actividad geológica. Esta crisis tiene nombres y apellidos, es el resultado de una determinada forma de sociedad, la capitalista. Pero ni los recursos productivos ni las personas son capital, sino que éste es una relación social determinada que se caracteriza porque dichos medios son propiedad de una minoría que se coloca en posición de poder explotar a una mayoría, la cual no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo, física e intelectual, para poder vivir. Por tanto, la economía puede funcionar de forma muy distinta si cambiamos las relaciones de propiedad que dominan nuestra sociedad.

El movimiento ecologista ha puesto en evidencia hace años que la economía no puede reducirse a magnitudes monetarias. Se trata de unos medios físicos, de personas trabajando colectivamente y de recursos naturales vitales y limitados. Agotar esos recursos irrecuperables es positivo en términos de economía capitalista, cuando en realidad es un desastre para la sociedad. Pero eso, sólo muestra el conflicto entre la rentabilidad privada y las necesidades sociales, el conflicto entre el capitalismo y la sociedad. Un premio Nobel ya denunció que las compañías farmacéuticas no estaban interesadas en medicinas que curasen sino que preferían aquellas que cronificaban, pues eran mucho más rentables. Igualmente, cualquier gran compañía siempre situará su beneficio particular por delante de aquello más eficaz socialmente. Una empresa energética privada jamás puede estar interesada en un ahorro efectivo de energía, pues su negocio es vender cuánta más energía mejor.

Por eso, hoy es frecuente reclamar que se saquen del mercado recursos tan importantes como la tierra cultivable, los mares, la vivienda, etcétera. Sin embargo, lo que debemos hacer es sacar la economía del mercado. Sólo a partir de transformar en público el corazón del sistema productivo se puede pilotar un cambio que ponga la economía al servicio de la sociedad y no al revés, como de hecho sucede ahora. Se trata de poner en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de lo que existe, reformar el sistema productivo para reducir drásticamente las desigualdades económicas, hasta su desaparición, y tener en cuenta los límites de los recursos naturales.

Entonces, lo que la sociedad debe hacer es tomar lo que ya existe y transformarlo. El propio desarrollo de la economía nos ofrece los mimbres para hacerlo. No hay que ir muy lejos, la experiencia ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se puede hacer desde el sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible a todos los grandes sectores productivos: metalurgia, transporte, comunicaciones, constructoras, química, distribución, etcétera.

¿Qué son las grandes empresas? Son una minoría del total pero mueven la parte decisiva de la economía. Millones de trabajadores y una producción vital para la sociedad, porque

determinan totalmente la producción, las prioridades económicas y las condiciones de vida de todos. Es ridículo hablar de libre competencia en este terreno, son oligopolios controlados por una minoría de grandes accionistas y directivos con un único objetivo: la máxima ganancia. ¿Qué ciudadano puede crear una petroquímica para competir con Down o con Repsol? Nadie. Se trata de grandes medios de producción cuya gestión no puede dejarse en manos privadas.

Las fuerzas productivas han alcanzado tal envergadura, su integración internacional es de tal intensidad, sus efectos en el medio natural tan evidentes, que no podemos seguir tratándolas de la misma forma que en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la clase dirigente tiene las mismas concepciones económicas que entonces, porque defiende los mismos intereses: sus ganancias y la propiedad sobre los medios de producción, que es de donde surgen. Las ideas que hoy llaman neoliberales, que ni son nuevas ni liberales, no son otra cosa que la defensa de los intereses de la burguesía y nos suenan tan absurdas porque chocan con la realidad.

El reconocimiento de su magnitud social lo hace, sin intención, el propio sistema cuando las salva y sostiene con dinero público. Basta ver que todo el sistema financiero mundial hubiera quebrado si no fuese por las ayudas públicas. Lo digan o no, ya las han nacionalizado, formal o tácitamente. Pero las salvan y siguen en manos privadas, o con la intención de devolverlas a manos privadas. Porque no están salvando el sistema financiero, sino su dominio sobre los ahorros de la sociedad. Salvan a los banqueros, no a los bancos.

Pero la situación de los bancos no es distinta a la del resto de las grandes empresas que, de una forma u de otra, se apoyan en el Estado. En la época de auge, la cantidad de gasto público creció en todo el mundo, en contra del supuesto ideario liberal. Y los más beneficiados del mismo son las grandes empresas. Un ejemplo paradigmático es la invasión de Irak, hecha para garantizar el control de las petroleras americanas sobre Oriente medio, además de ser un enorme negocio para las empresas suministradoras de armamento y apoyo logístico de más de tres billones de dólares y gran responsable de la enorme deuda pública norteamericana. En el Estado español, las grandes empresas son las que menos pagan en impuestos proporcionalmente, las que más defraudan y las que más se benefician de contratos públicos y ayudas de todo tipo. En otras palabras, el capitalismo no podría subsistir sin la intervención del Estado, su Estado. Pero esa situación no hace sino reflejar la madurez de las fuerzas productivas para pasar a ser propiedad social, para su gestión pública y democrática por parte de sus trabajadores y de la sociedad. Nuestro objetivo es sustituir el mecanismo de mercado, con sus crisis y anarquía, por una administración colectiva y democrática de las grandes fuerzas productivas.

Una planificación democrática de la economía

Por lo tanto, la primera idea que debemos tener clara para elaborar una alternativa a la crisis es que debe pasar por la nacionalización de las grandes empresas. Se trata de dar un carácter social, en lugar de privado, y someter a control democrático algo que ya es fruto de una labor social de millones de trabajadores y que afecta a la vida de toda la sociedad.

Es cierto que la experiencia de la URSS fracasó. De ella hemos aprendido que no basta con nacionalizar las fuerzas productivas, que además, hay que garantizar el control democrático de

las mismas para evitar que surja un monstruo burocrático que ahogue la economía y a toda la sociedad. Es curioso que la mayoría de los nuevos capitalistas rusos sean antiguos burócratas estalinistas. Han pasado de gestores privilegiados de las fuerzas productivas a ser sus dueños. Socialismo y control democrático de la economía y la sociedad deben ir unidos, o ambos fracasarán. Si los trabajadores comprueban que la dictadura del empresario ha sido sustituida por la de un nuevo burócrata privilegiado, el socialismo no podrá funcionar. Tendremos que garantizar el control real, cotidiano de las empresas, la eliminación de privilegios salariales, la limitación de mandatos en los puestos directivos, igual que en el resto de la sociedad.

Sin embargo, las condiciones materiales actuales son muy distintas de las de 1917. Rusia era un país enormemente atrasado en el que los propios comunistas creían imposible que el socialismo triunfara si no se extendía la revolución a escala mundial, y tuvieron razón. Pero las revoluciones no las decide ningún partido, las protagonizan las masas cuando la sociedad en la que viven no les deja otra opción. Los militantes bolcheviques tuvieron el inmenso mérito de encabezar con éxito la primera revolución socialista. No debemos confundir a Lenin con Stalin, como no debemos confundir a Robespierre o Babeuf con Luis Bonaparte. La historia de la URSS nos deja un rico legado de experiencias que pueden ayudarnos a tener éxito donde ellos no lo tuvieron. En primer lugar, y fundamentalmente, porque hoy disponemos de la base material para hacer posible otra sociedad. La enorme productividad del trabajo y la incorporación al trabajo de millones de asalariados que hoy están condenados al paro y al subempleo perpetuo, permitiría generalizar una jornada laboral reducida de tal forma que la participación en el control de la sociedad, en la actividad política en el mejor sentido de la expresión, sería algo al alcance de todos. Bajo el capitalismo, el aumento de la productividad no libera al ser humano de la explotación, por el contrario, la dinámica conduce a reducir plantillas explotándolas más intensamente. Las largas jornadas de trabajo son un obstáculo a la participación democrática de la sociedad, que ahora es posible eliminar.

Y, además, las tecnologías de la información y comunicación permitirían interconectar toda la economía y harían posible que la población pudiera participar con información suficiente en la toma de decisiones. Los mismos mecanismos que hoy utilizan las grandes empresas para su gestión interna y los sistemas financieros para dominar el conjunto de la economía, servirían al conjunto de la sociedad para controlar y determinar el uso de las fuerzas productivas. Existen las condiciones para, en lo que a los grandes sectores productivos se refiere, sustituir el mecanismo de mercado para la asignación de los recursos por una planificación, por una administración racional y social de los recursos.

Con una columna vertebral económica pública que administre racionalmente los recursos la democracia podría entrar en la economía, el mercado iría quedando relegado a un papel cada vez más secundario en ella. Las pequeñas empresas y, sobre todo, las cooperativas podrían florecer en esas condiciones. La economía, coordinada a gran escala, debería ser enormemente descentralizada. La competencia entre países por cuota de mercado, la explotación de las personas y los pueblos, podría ser sustituida por la cooperación en beneficio mutuo. Dejaría de tener sentido producir muchos productos a miles de kilómetros del lugar de uso final, por la única razón de que la mano de obra es más barato y los costes de transporte no tienen en cuenta ni el derroche de recursos no renovables ni la contaminación. La obsolescencia programada o las patentes desaparecerían. La producción de armamento sería innecesaria y

la producción de bienes de lujo también. Lo decisivo es que las personas podríamos, por fin, decidir racionalmente, con criterios de beneficio social y a largo plazo, el funcionamiento de las fuerzas productivas.

El propio capitalismo está generando un enorme monstruo burocrático en sus empresas, a pesar de todas las medidas que buscan mejorar la calidad de la producción, hay un límite objetivo que hace imposible que esas medidas puedan funcionar plenamente. Cualquier mejora que el trabajador sugiera para su trabajo, que permita aumentar la productividad, es una amenaza para sí mismo, pues propicia la reducción de plantilla, y es que la empresa obtiene sus beneficios explotándole. De hecho, el régimen de las empresas no es democrático sino que los propietarios son la autoridad inapelable. Nunca entró ni entrará la democracia en las empresas privadas, a lo sumo la lucha arrancará derechos y ciertas limitaciones a esa autoridad, que tratarán de suprimir a la primera ocasión, como hemos podido comprobar en las últimas contrarreformas laborales.

En una sociedad socialista, los trabajadores tienen que comprobar día a día que trabajan en su beneficio y de la sociedad, que los avances en la organización del trabajo y en productividad, repercuten en unas mejores condiciones de trabajo y de vida, y del conjunto de la sociedad. Las relaciones sociales y productivas deben ser diáfanas y evidentes para todos, dominándolas nosotros a ellas y no ellas a nosotros.

Una propuesta para el Estado español y la Unión Europea

Izquierda Unida debe dar una respuesta concreta a la pregunta clave que nos haría cualquier trabajador, joven... ¿qué haríamos, si gobernásemos, para salir de esta situación?

Sólo podemos revertir la situación de paro crónico y de empobrecimiento de los trabajadores y la mayoría de la sociedad, si tomamos el control de la riqueza y los medios de producción. Sin ese control, cualquier medida de incremento progresivo de los impuestos, aumento del gasto público o de los derechos de los trabajadores, chocará con las retiradas de fondos, los cierres y la evasión de dinero. En última instancia, el movimiento del capital es libre y si no obtiene la rentabilidad que desee, se irá a otra parte a buscar mejores ingresos. Esa es su característica y su mejor arma contra el movimiento obrero. No hablamos de posibilidades, ya se han ido cientos de miles de millones de euros a lo largo del último año, conforme la crisis arrecia.

Por eso, la aplicación de una reforma fiscal mucho más progresiva, la recuperación de los derechos de los trabajadores, debe ir unida a medidas que pongan la riqueza y los medios de producción bajo control social y democrático, y eso sólo es posible mediante su nacionalización.

La actual constitución consagra que la riqueza económica tiene que tener como prioridad la atención de las necesidades sociales, y abre la puerta a la expropiación por interés general. Pero también dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno con un sueldo que permita mantener adecuadamente a una familia, a una vivienda, etcétera y no se cumple. En cambio la propiedad privada se defiende a capa y espada. Más tampoco cualquier propiedad privada, pues la de cientos de miles de familias desahuciadas es abolida todos los días, constantemente. La de

miles de trabajadores arrojados al desempleo, y sus familias, es abolida una y otra vez devorada por las deudas financieras y la necesidad de sobrevivir. La de miles de pequeños empresarios arruinados es destruida cotidianamente. La única propiedad que se defiende a capa y espada es la de los más ricos, la de las grandes empresas, financieras o no. Si queremos defender el derecho a una vivienda digna, a un empleo en condiciones, el futuro de las pequeñas empresas, de la sanidad y la educación públicas... debemos abolir la propiedad de los más ricos, su dominio sobre los grandes medios de producción y de cambio.

No hay que ir muy lejos. El socialista francés Holland no ha necesitado ni 100 días de gobierno para acabar alineado, más o menos a regañadientes, con las políticas de Merkel. No le votaron para seguir haciendo la misma política que Sarkozy, con matices. Pero no es casualidad, quien posee los medios de producción decide la política. La burguesía francesa, igual que la española, tiene más en común con la burguesía alemana que con sus propios trabajadores y si no estás dispuesto a enfrentarte a ella, a transformar de raíz el sistema, tarde o temprano acabarás haciendo la misma política, independientemente de las buenas o malas intenciones. No existe una “tercera vía” entre el capitalismo y el socialismo.

Por eso, este programa sólo es posible si cuenta con el apoyo activo de una parte decisiva de la sociedad, porque la clase dominante no lo aceptará mansamente ya que supone la abolición de todos sus privilegios. Pero no es una propuesta a largo plazo, sino un plan de acción que un gobierno de izquierdas tendría que poner en práctica hoy mismo si conquistase el apoyo suficiente. El socialismo no es una propuesta para un futuro indefinido, sino una tarea práctica. Y para conquistar ese apoyo hay que defenderlo abiertamente.

Los derechos sociales y laborales primero

Un gobierno de izquierdas debe tomar las siguientes medidas:

- Todo el mundo tiene que tener el derecho y la obligación de trabajar, en condiciones dignas y con un salario que le permita vivir, solo o en familia, de forma digna. Para ello es necesario:
 - Reducción general de la jornada laboral a 35 horas, sin disminución salarial equivalente en ningún concepto.
 - Adelanto de la edad de jubilación a los 60 años.
 - Puesta en marcha de un plan de creación de empleo público. Su cuantía vendría determinada por el objetivo, de forma combinada con las medidas anteriores y la creación de puestos de trabajo en el sector privado, de alcanzar el pleno empleo. Pero la espina dorsal de la propuesta es el desarrollo del sector público que tendrá que crear varios millones de puestos de trabajo.
 - Establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 1.000 euros mensuales y una escala móvil de salarios, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo.

- Con carácter inmediato se promulga un subsidio de desempleo indefinido mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, pues ninguna persona debe carecer de ingresos suficientes para vivir con decencia.

El sector financiero

- No se debe transferir ni un solo euro más a ninguna entidad financiera hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas del sector financiero español que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda.
- Una vez finalizada la investigación se establecerá qué deuda devolver y qué deuda debe condonarse, así como garantizar que los primeros en responder por las mismas son los grandes accionistas de las entidades financieras, y no los contribuyentes.
- El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler.
- A fin de garantizar que una situación semejante no pueda volver a repetirse y una gestión racional, democrática y transparente de los ahorros de la sociedad, se nacionalizará de forma integral el sector financiero. La magnitud de las ayudas económicas públicas que han recibido tanto cajas como bancos, lo justifica por sí solo.
- Su gestión será sometida a un control democrático, vinculada a las políticas sociales y económicas, y sus directivos serán elegidos de forma democrática, por un tiempo limitado, y con salarios equivalentes a los de empleado del sector público.

Un cambio de sistema productivo

- Nacionalización de todas las grandes empresas, junto con los bancos. Muchas eran públicas hace unos años, y todas son determinantes para la vida cotidiana de la población. A partir de su nacionalización, su funcionamiento tendrá como prioridad el desarrollo de unas condiciones de vida y trabajo dignas para toda la sociedad. Su gestión será sometida a un control democrático, vinculada a las políticas sociales y económicas, y sus directivos serán elegidos de forma democrática, por un tiempo limitado, y con salarios equivalentes a los de empleados del sector público.
- Salvo en los casos de empresas con pérdidas mayores que su valor de capitalización, a los pequeños accionistas se les reembolsaría en un plazo a negociar el valor de sus acciones, hasta un máximo de 100.000 euros.
- Elaboración pública y transparente, bajo control democrático, de un plan de reindustrialización del Estado español, con el objetivo de transformar del sistema

productivo que tenga en cuenta las necesidades sociales, el uso óptimo de los recursos y la creación de varios millones de puestos de trabajo públicos, con salarios dignos. Por ejemplo, que el sector energético público iniciara la transformación del modelo energético hacia uno basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, o una empresa pública farmacéutica que, en colaboración con la sanidad y la universidad pública, desarrolle y abastezca de las medicinas necesarias con criterios de salud pública y no de rentabilidad privada.

- Bajo supervisión de los representantes de los trabajadores, todas las empresas con viabilidad económica, tendrán que restituir a los trabajadores despedidos y aumentar las plantillas para aplicar las 35 horas. La viabilidad o no de una empresa la establecerá una representación de los trabajadores y la administración.
- Se establecerá una escala salarial con un salario mínimo nunca inferior a 1.000 euros y un salario máximo nunca superior a 5.000 euros netos. El referente inicial serán los vigentes en la administración pública. Los representantes políticos electos nunca podrán ganar más del salario medio, ni sus mandatos superar más de los 8 años. La limitación de mandatos también afectará a los directivos de empresas nacionalizadas.
- Expropiación inmediata de todas las Sociedades y Vehículos de Inversión (Sicavs, oficinas financieras, etcétera).
- Supresión de la libertad de movimientos de capitales. Toda empresa española deberá tener su sede fiscal en el Estado español y todos los fondos de empresas y particulares en paraísos fiscales deberán ser repatriados. Igualmente, todas las empresas con capital extranjero deberán tributar en el Estado español por las actividades que realicen aquí.
- Se transforma en monopolio público el comercio exterior. Las nuevas empresas públicas y el estado promoverán la suscripción de convenios de colaboración con otros pueblos en aras al desarrollo mutuo, mediante un intercambio justo que garantice unas condiciones laborales dignas y evite el expolio de los recursos naturales. No colaborarán jamás con regímenes que conculquen los derechos democráticos o sociales.
- Se establecerá un arancel a las importaciones de países con mano de obra sin derechos laborales, sindicales ni sociales, ni leyes que protejan el medioambiente equivalentes a las nuestras, a fin de evitar el dumping social y medioambiental.

Una Europa de los pueblos y no de los mercaderes

Este programa sólo puede tener éxito si se extiende a escala europea.

Una solución definitiva y permanente sólo puede darse a escala europea. Es necesario que se nacionalice el sector financiero continental, el cual ha recibido enormes inyecciones de dinero público (la banca alemana más de 300.000 millones de euros) y que el Banco Central Europeo

actúe al servicio de las necesidades de la mayoría y no de la minoría multimillonaria. Deben auditarse las cuentas de todo el sector financiero, sanearlo con cargo a sus grandes accionistas y acreedores, en primer lugar, y mutualizar, unificar, la deuda europea. El control de la moneda permitiría acabar con la evasión de riqueza a paraísos fiscales que realizan todas las grandes fortunas.

A partir de ahí, debe ponerse en marcha un plan de desarrollo europeo basado en la nacionalización de las grandes multinacionales. Una banca pública europea y un amplio sector público europeo posibilitarían un desarrollo integral y planificado de los recursos económicos y su control democrático, dando prioridad la satisfacción de las necesidades sociales y no la explotación de los trabajadores, una utilización racional de los recursos naturales y no su expolio, y la cooperación entre países que permita un desarrollo integral de todos, en lugar de la competencia en beneficio de los más poderosos. Son las respectivas clases dominantes de cada país las que nos están imponiendo medidas de ajuste, a sus trabajadores y a los de los demás países, en su propio beneficio y son ellas las que están alimentando la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las naciones.

No defendemos la salida del euro porque no es una solución para los trabajadores. Salir del euro sólo agravaría las condiciones de vida de los trabajadores, el volumen de las deudas (en euros) se dispararía, pues la nueva moneda nacería enormemente devaluada. Y, en última instancia, es una propuesta que desvía la atención del problema de fondo, el capitalismo. La Unión Europea y una moneda única son cosas necesarias, acorde con el desarrollo económico alcanzado. Lo que necesitamos es acabar con la propiedad privada de las grandes fuerzas productivas, así como superar definitivamente el Estado nacional, que son las raíces del problema, y pasar de una Europa de los mercaderes a una Europa federal, democrática y socialista. Las burguesías europeas no pueden unir Europa de forma democrática y beneficiosa para todos, sólo pueden lograrlo si se todas se someten a la autoridad de la burguesía alemana y bajo unas condiciones de explotación y falta de derechos democráticos para los asalariados y la mayoría de la sociedad. Sólo la clase trabajadora podría alcanzar una unión de Europa, democrática y solidaria.

Somos conscientes de que si aplicamos la política que proponemos querrán expulsarnos los propios capitalistas alemanes y del resto de países europeos de la Unión, pero eso ya es otra cosa. Nosotros apelaremos a los trabajadores alemanes, franceses, italianos, daneses, griegos, portugueses, etcétera, que sufren exactamente los mismos problemas y conseguiríamos su apoyo, para transformar nuestros países respectivos y la Unión Europea.

Igual que las distintas élites económicas y sus gobiernos se ponen de acuerdo en que paguemos nosotros el pato, nosotros debemos unirnos en defensa de esta política y por la exigencia de una nueva Unión Europea socialista y democrática. Hay que exigir a sindicatos de clase y partidos de izquierdas que coordinen las movilizaciones a escala europea, para preparar luchas y huelgas generales continentales, así como que se elabore un programa común. La tarea no es fácil, pero es posible e imprescindible.